



Facultad de Ciencias Jurídicas

Análisis jurídico de Reforma e Incorporación al Código Penal Nicaragüense (Ley No. 641) de la figura del Femicidio.

Trabajo investigativo para obtener el título de Licenciados en Derecho con
mención pública

Autores:

Mario José Laguna Vanegas.

Walkyria Vanessa Huete Moreno.

Tutor(a)

Msc. Scarlett Palacios Vega.

Managua, Nicaragua.

Marzo, 2012.

Dedicatoria.

Dedicamos esta monografía a nuestros padres especialmente a mi madre Salvadora de Jesús Vanegas Alemán (q.e.p.d), ya que fue una persona tenaz, valiente y de gran apoyo e inspiración a la realización de ésta investigación, igualmente a mis hermanos e hijos, esposos (as), por su apoyo incondicional.

Agradecimiento.

Agradecemos a dios y a la santísima Virgen María por iluminar nuestras mentes y darnos sabiduría, luz y verdad en nuestro trabajo monográfico, así mismo agradecemos a las pocas instituciones que nos proporcionaron algunos materiales que nos sirvieron de gran manera en nuestra investigación, y de manera especial a la Msc, Scarlett Palacios Vega, nuestra tutora por su valioso e incólume apoyo y esmero, ya que sin ella este trabajo no se hubiese realizado y a todas aquellas personas que de una o de otra manera nos ofrecieron su apoyo.

Abreviaturas.

CN. Constitución Política de Nicaragua

CP. Código Penal de Nicaragua

CPP. Código Procesal Penal de Nicaragua.

CCPDH. Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Convención de Belem do Pará. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer

CSJ. Corte Suprema de Justicia de Nicaragua

CLADEM. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

CONAPREVI. Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer.

IIDH. Instituto Interamericano de Derechos Humanos

INIM. Instituto Nicaragüense de la Mujer.

MP. Ministerio Público de la República de Nicaragua

MEC. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

La Boletina. Revista Feminista Nicaragüense

OMS. Organización Mundial de la Salud

ONU. Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres.

PN. Policía Nacional de Nicaragua.

RMCV. Red de Mujeres Contra la Violencia.

VIF. Violencia Intrafamiliar

Índice

Abreviaturas

Introducción

1.- Conceptualización Jurídica del Femicidio

1.1- Doctrinas acerca de la Violencia hacia las mujeres

1.2- Concepto de Femicidio o Feminicidio

1.3.- Tipos de Femicidios.

1.2.1.-El Femicidio íntimo.

1.2.2.-Femicidio no íntimo.

1.2.3.- Femicidio por conexión.

1.2.4.-Femicidio en masa.

1.3.1- Elementos y Manifestaciones que originan la muerte de mujeres de manera violenta para la comisión del femicidio

1.3.1.- Desigualdad histórica.

1.3.2 Factor social.

1.3.3.- La violencia intrafamiliar como antecedente al Femicidio

1.3.4.- Misoginia.

2.- Ordenamiento Jurídico Nacional referido a la violencia intrafamiliar e igualdad de condiciones en materia de Derechos Humanos

2.1.-Contitucion Política de Nicaragua.

2.2.- Código Penal Nicaragüense

2.3. Ley 648 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades y su reglamento

2.4. Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No.641, Código Penal

3.- Instrumentos Regionales

3.1- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres
“Convención de Belem do Para”

3.2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

4.- Análisis Comparativo, Jurídico Centroamericano y regional referente al delito de Femicidio.

4.1 Derecho Comparado

4.2 Costa Rica.

4.3 Guatemala.

3.4 Panamá.

4.4 El Salvador.

4.5 Honduras.

4.6. Contexto actual y Jurídico en Nicaragua de la figura del femicidio.

5.- Análisis de la Incorporación de la Figura del Femicidio en nuestra legislación Penal.

5.1.- Importancia de Incorporación de la figura del femicidio como tipo penal.

5.2 Aspectos procedimentales.

Conclusiones.

Recomendaciones

Listas de referencias

Introducción

El fenómeno del Femicidio o Feminicidio, que es la muerte de manera violenta de mujeres, ya sea por asesinatos, homicidios, parricidios. Al igual que en otros países, en Nicaragua van en aumento y adquiriendo mayor dimensión afectando a mujeres de todos los sectores sociales, con o sin niveles de educación, lo que deja entrever que la muerte de mujeres de manera violenta por parte de sus parejas, ex parejas y familiares, no es exclusiva de un sector social, no distingue, colores políticos, posición económica, religión, ni formación académica.

Esta problemática ha sido abordada y discutida por diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, e incluso se han presentado ante proyecto de Ley referente a este tema con el objetivo de disminuir o erradicar la muerte de mujeres y que se haga justicia efectiva, ya que en la mayoría de casos son absueltos por deficiencias en el proceso, por negligencias de fiscales, policías, jueces y por la incidencia de los que detentan gran poder político y económico, pocos son condenados y muchos de ellos son prófugos de la justicia.

Aunque existe un marco jurídico legal desde las instituciones implicadas para el abordaje de estos delitos, diferentes estudios han identificado limitaciones y obstáculos que encuentran las personas que han vivido violencia intrafamiliar y sexual en el proceso de búsqueda de justicia.

La violencia contra las mujeres debería ser un tema de prioridad para el Estado, no se está viendo como algo urgente que se debe de prevenir, la falta de acceso a la justicia no es el hecho de que el hombre no fue capturado o no enfrenta un proceso judicial, la falta de acceso a la justicia inicia desde que las víctimas es pesimamente atendidas en las diferentes delegaciones de las comisarías de la mujer, seguido de las malas tipificaciones de los delitos.

Como un aporte de lo antes mencionado y que hace necesario incluir en materia de derechos humanos en relación a la mujeres, es realizar un análisis jurídico de reforma e incorporación al Código Penal de Nicaragua (Ley No. 641), la figura del Femicidio no solo para evitar que continúe aumentando la muerte de mujeres, sino que también el Estado debe de cumplir con compromisos e Instrumentos

internacionales, entre ellas “La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres “convención de Belem do Para´ y que Nicaragua reconoce como tal.

Con esta Reforma, introducir la figura del Femicidio en la legislación Nacional como lo tipifican algunos países de la región permitiría que además de incluir al Código Penal el delito de Femicidio, obligaría al Estado de Nicaragua honrar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos hacia las mujeres mismo que es suscriptor, es decir, complementación y adecuación a nuestro sistema de la figura delictuosa del Femicidio a nuestro ordenamiento interno, vendría a llenar los vacíos legales de procedimientos que posee nuestro sistema penal altamente deficiente.

Si bien es cierto esto no erradica de manera definitiva con la muerte de mujeres, pero será de gran importancia y su aplicación va a reducir las muertes de mujeres, asimismo la misma reforma debe de establecer mecanismos jurídicos de manera específica para garantizar un procedimiento expedito, justo, oportuno e imparcial que no re-victimice a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, estableciendo la coordinación interinstitucional e incluyendo los diferentes organismos o grupos representativos defensores de los derechos de las mujeres.

Esperando que este análisis jurídico de reforma e incorporación del Código Penal Nicaragüense vigente (Ley No. 641) de la figura del Femicidio, nos permita llegar a conclusiones y dar recomendaciones que pueda servir de referencia a las personas que desde las distintas instituciones y organismos incluyendo a estudiantes, se enfrentan día a día con la problemática de violencia doméstica e intrafamiliar y sexual.

1.- Conceptualización Jurídica del Femicidio

1.1- Doctrinas acerca de la Violencia hacia las mujeres.

La idea de este enfoque, en particular a la violencia intrafamiliar, es reconocer que la historia de nuestro país tiene un papel relevante que debe ser tomado en cuenta de forma integral, ósea que la realidad de la sociedad Nicaragüense los obliga a enfocar el tema con el interés que amerita, no se trata de hacer sólo un estudio teórico, sino considerar con preocupación la afectación de un mal que si bien responde a una prevención o solución del sistema penal de forma integral.

Cada aporte constituye una sumatoria que podría indicarnos el esfuerzo común que debemos hacer como profesionales y parte integrante de un seno familiar en pro de una sociedad más equitativa responsable y saludable en que la mujer es un pilar fundamental.

Como una manera de abordar el tema de violencia con profundidad y dar aportes en la consecución de objetivos de prevención, se hace necesario abordar el tema de la violencia desde el punto de vista de la opinión de los diferentes actores en el tema y a lo que según:

Aguilar, (2010)

Refiere que la Violencia, según los Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un fenómeno sumamente complejo que hunde sus raíces en la interacción de muchos factores biológicos, sociales culturales, económicos y políticos cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. (p.183).

De esta manera se puede decir que la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales a las investigaciones sobre la prevención de la violencia, para desarrollar y perfeccionar el método ecológico que propone la O.M.S. lo que de acuerdo a Aguilar, García (2010), el método ecológico que propone la OMS influye los tres

niveles, prevención, los derechos humanos, como poderes jurídicos cuyo uso abusivo y fraudulento es un factor de riesgo...

De acuerdo a la “Ley No.641: Código Penal Nicaragüense (*“La Gaceta, No. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo”, 2008*)”, establece en su artículo 155 Pn. Violencia Domestica o intrafamiliar.

Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o síquica contra quien sea o haya sido su conyugue o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, o sobre las hijas e hijos propios del cónyuge o del conveniente fuera de los casos del derecho de corrección disciplinaria, o sobre ascendencias o discapacitados que convivan con él o con ella, o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela o guarda de uno o de otro y como consecuencia de la realización de los actos anteriormente señalados, se ocasionan: a) lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión; b) lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión y c) lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de violencia Intrafamiliar, se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo periodo de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda.

Con la aprobación de la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres y reformas a la Ley No. 641, en particular al artículo 155 del Código Penal, quedó establecida de la siguiente manera, y, se leerá así:

Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia, intimidación física o psicológica , en perjuicio de quien haya sido su conyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, niños, niñas adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre ascendientes, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad , adopción , o sujetos, a tutela. En el caso de niñas y adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección disciplinaria.

A partir de la aprobación en lo general de la Ley Integral de violencia hacia las mujeres y de reformas al Código Penal Nicaragüense, éste concepto de violencia intrafamiliar arriba aludido, se amplía, dado que la norma Jurídica reconoce que la VIF, se manifiesta desde el punto de vista privado y público, es decir que la Violencia Intrafamiliar no es de exclusividad, el ámbito privado o familiar, como lo establece el Código Penal de Nicaragua. (Ver artos 8. Incisos a, b, c, d, e, f. y g, 9,10.11, 12, 13, 14,15 y 16 de la Ley No. 779) sino desde el punto de vista público y privado.

Con la Ley, contra la Violencia hacia las mujeres, quedó establecido las diferentes manifestaciones de VIF y las distintas penas de cada una, que varía de acuerdo al tipo de violencia cometido. Es decir esta normativa es más extensiva, integral, y estructural, ya que reforma, conductas delictuosas, habituales, privadas y públicas que la Ley No. 641, no lo establece.

En tal sentido técnico jurídico nuestro Código Penal vigente retoma disposiciones anteriores y la reformula e incorpora otras figuras delictivas, que constituyen una novedad, en lo particular a las mujeres, circunstancia que obliga a que el Administrador de justicia perciba el sentido de la norma, sin perder de vista otros aspectos que indiscutiblemente inciden, aunque su naturaleza no corresponda propiamente al estudio del derecho Penal, pero a efecto de este, deben ser tomada en cuenta.

Así mismo el legislador incorporó criterios jurisprudenciales en la estructuración de las normas, lo que se pretende no es esquematizar una norma, sino que ésta cumpla su verdadera función y eso es posible en la medida que apliquemos el derecho ajustado a los principios rectores, imposiciones y regla generales que se anuncian en nuestro Código Penal.

El abordaje de los delitos no responde propiamente al orden de la estructura del Código Penal, sino por su mayor relevancia e incidencia en la población considerando nuevas figuras delictivas, y los cambios que sufrieron algunos de los delitos que se destacaron en la Ley No. 230, “Ley de reformas y adiciones al Código Penal “publicado en la *Gaceta No. 191 de 1996*), la cual fue derogada e

incluida en nuestro Código Penal, por ello es que conocemos o se conoce la violencia domestica e intrafamiliar, cuya conducta ha generado el pronunciamiento de diversos sectores Nicaragüenses; por lo que no es de extrañarse que los legisladores hayan incorporado una disposición al respecto, que viene a superar el vacío legal existente.

En la Ley antes mencionada, la cual se encuentra derogada, la falta de regulación de dicha conducta que se mantuvo en nuestro ordenamiento jurídico anterior, podría responder a una apatía que se constituyó en una aceptación de dicha conducta como algo normal, en que se tergiversaron los valores con un alto grado de responsabilidad compartida por todos, tanto hombres como mujeres, acallando circunstancias que contribuyeron a generar el incremento de la misma.

Las consecuencias de dicha práctica tiene una gran connotación en el desarrollo de la sociedad, ya que su punto de partida es el seno familiar, causando un daño no sólo en la víctima directa, sino a todos aquellos que conviven a su alrededor, e influyendo en un patrón de conducta derivada de la mala praxis, y que en la misma se incluyeron en los diferentes instrumentos y convenciones internacionales siguientes:

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer del 20 de Diciembre de 1993, que define la violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública o privada.

IV Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing (Pekín), Septiembre de 1995, se abordó el tema de la violencia contra la mujer en el seno de la familia.

En el Consejo de Europa, existen iniciativas sobre violencia en el seno de la familia desde 1985. En el contexto comunitario, existe la Resolución sobre agresiones hacia la mujer del parlamento europeo en 1986,

La Resolución A4-0250/97 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. (p 182)

Debemos de tener en cuenta que el fenómeno de la violencia intrafamiliar no se atiende únicamente en la esfera de la justicia penal como un medio de prevención y castigo, sino que se recoge dentro de la norma sustantiva como un hecho punible, e incluso en legislaciones como España tienen juzgados especiales, denominados Juzgados de violencia sobre la mujer con competencia en materia Civil y Penal.

Al analizar nuestra disposición en nuestro Código Penal vigente, en percepción a otras legislaciones, nos damos cuenta que el delito como tal requiere una mayor profundización, lo que podría considerarse más adelante como una iniciativa de reforma, pero que nos resta al hecho de que nuestros legisladores hayan incorporado la tipificación de la conducta, misma que debemos analizar con sus alcances y efectos.

Uno de los aspectos que merecen ser discernidos son las características que constituyen este tipo Penal, como son la habitualidad o permanencia, es decir todo lo relacionado al parentesco, consanguinidad o afinidad, convivencia en el domicilio, los cuales son incorporados al momento de redactar la norma que tipifica dicha conducta.

Con respecto a otros países tales como España en el Código Penal, regula la violencia intrafamiliar en similares términos de nuestro Código Penal en el artículo 153 Pn, Código Penal Español, con la diferencia de que el primero, la configuración de la norma en el término “habitual”, y como un requisito esencial para la tipificación.

En comentarios a la aplicación la norma española, se diferencia un grado de dificultad en cuanto al término “habitual” por su ambigüedad.

Aguilar (2010,) p.185) cita a Vidal J (s/f). Quien dilucidó a través de la aplicación análoga del arto 94 el cual establece los efectos de la suspensión y sustitución de penas”, criterio reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español.

Otros mantienen un criterio distinto al anteriormente señalado, en que se prescinde del autonomismo numérico, siendo lo relevante, Aguilar, (2010, P.185) cita a Plana J.A (s/f)., en relación a la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de Julio del año 2000 que para apreciar la habitualidad más que la pluralidad en sí misma es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado permanentemente de agresión.

Es en ésta permanencia que radica el mayor desvalor que justifica una tipificación autónoma por la presencia de una gravedad mayor que, resultaría de la mera agregación de las des valoraciones propias de cada acción individual.

En este sentido Aguilar (2010, p.186) cita a Tradon (1999), la cual expresó que el término habitualidad se revela así como un término ambiguo e insatisfactorio que puede plantear tales problemas de interpretación que lo haga ineficaz para servir al propósito que determinó su introducción en el Código Penal.

En éste sentido se entiende, pues que el precepto debiera describir de una manera más precisa el termino de habitualidad, o, incluso sustituirlo por otro, algunos han apuntado el de “permanencia”, para que a los efectos que analizamos, podamos contemplar como tal toda actuación repetida en el mismo sentido, con o sin condenas previas, sirviendo todas ellas para constatar y valorar ese estado de agresión permanente.

De manera que Aguilar (2010) retoma al escritor Cobo J (1999), quien considera que la habitualidad es un concepto fáctico que no coincide ni con el contenido del arto 94 Cp., ni, desde luego, con la reincidencia, la habitualidad ha de ser entendido como concepto criminológico social, no como concepto jurídico. (p.185)

Aguilar, (2010, p. 186) cita a Del Moral G (s/f), y, destaca tres aspectos que perfilan el concepto de habitualidad, que en síntesis señala.- Un factor es el

número de actos de violencia para que se hable de habitualidad, ya que lo que se castiga en el delito es la creación de un clima de violencia permanente o sostenida; la apreciación de un elemento cronológico, con cierta cercanía temporal entre los distintos episodios de violencia; y, la habitualidad puede construirse con actos de violencia ejercidos sobre distintos sujetos pasivos.

Bajo el amparo de estos tres elementos señalados por el autor, podemos decir que el mismo deslucida que una de las características para la tipificación de la norma de conductas es la habitualidad, ya que muchas de los Códigos no están incorporados en la estructura de la norma lo que podían constituir para algunos, un elemento de habitualidad, de inexactitud, desacierto e inclusive el desconocer como tal al tipo penal, pero habrán quienes consideren que lejos de constituir todo ello, sea la solución más apropiada e inmediata para dar respuesta a quienes son víctimas de dicha conducta.

La falta de este elemento en la estructura del tipo Penal, ya sea en el sentido habitualidad-permanencia, nos lleva a reflexionar, que al carecer nuestra legislación de dicho elemento, no existe ese grado de dificultad de interpretación al aplicar la norma a que nos hemos referido con anterioridad, ya que la permanencia o habitualidad, no es determinante para el análisis, sino que entran en juego los otros elementos con que se configura o tipifica la conducta.

A nuestro criterio definen la esencia del delito, como es el grado de parentesco, consanguinidad o afinidad y la convivencia en el domicilio, lo que identifica el término de “violencia doméstica o intrafamiliar”, porque precisamente sin estos vínculos, no se podría hablar de este tipo de delito.

Verbigracia de los delitos de violencia de manera integral es la Ley Integral contra la Violencia hacia la mujeres, que en lo general y particular la norma, fue aprobada sin embargo la misma no ha sido publicado para su posterior vigencia.

Aguilar (2010).

Considera que la frecuencia con que se realiza dicha conducta, si bien es considerada por la especialidad de este tipo penal, al no estar establecida en la configuración del

delito en nuestra legislación, se da la posibilidad de que basta que se cumpla los elementos que configuran el tipo penal, una sola vez, para que se considere el delito como tal, es decir que no requiere de una conducta reiterada, para que pueda acogerse la denuncia o acusación en contra de quien realizó el ilícito, lo que conlleva a una ventaja en cierto sentido, ya que la víctima no tiene que esperar a que la conducta se manifieste en reiterada ocasiones para proceder a sus denuncias.. (p.186)

El Código Penal de Nicaragua en sus artículo 155 Pn. remite para la especificación del delito de violencia intrafamiliar lo dispuesto en la tipificación del delito de lesiones leves, graves, gravísima, y lo aplica con una pena mayor a lo considerado en la norma específica, por el hecho de haberse cometido en contra del familiar en cualquiera de los grados establecido así como el aprecio o actitud emocional, que se tenga a una persona (afinidad) y el entorno en que se produce (convivencia que crea lazo).

Es decir una lesión agravada, que se prolonga en una causa más de la establecida en cada uno de dichos artículos (151,152 y 153), pero que se sustrae de la norma específica que regula la lesión y se vincula con el arto.155 que contiene los elementos o ejes sobre la tipicidad de la violencia doméstica o intrafamiliar, con el fin de que no exista y se considere una duplicidad de la conducta delictiva, o que exista una doble sanción por una sola conducta.

En lo general la violencia como tal trasciende a la figura de género, la diferencia entre el término de violencia de género y violencia doméstica, con que algunos se refieren al tipo penal, puede considerarse para algunos como la falta de reconocimiento de la victimización de la mujer en sí.

Sin embargo, si reflexionamos el contexto del delito como tal, éste no puede quedar ceñido únicamente al término de “género”, ya que los efectos trascienden la individualidad del sujeto directo contra quien se ejecuta, y aunque es la víctima directa, los demás también sufren el efecto de ello, aunque la atención corresponda a otras ciencias a discernir ya que no identifica que el delito que se deba cometer en contra de las mujeres, sino que habla del cónyuge o conviviente,

puede ser cualquiera: mujer o hombre, niños, discapacitado, independiente de la que la incidencia sea mayor en la mujer, según estadística.

Otro aspecto importante, es la que enfocan en todo los sentido del núcleo familiar, al contemplar a los hijos, hijastro, discapacitados, que tenga tutela o guarda. La violencia la determina en contra el hombre o la mujer, el menor, persona mayores, discapacitados, cualquiera de ellos, en que exista una relación directa o en indirecta, interrelación de coexistencia, convivencia en un lugar físico.

Podríamos concretizar que el arto 155, recoge los elementos del tipo, pero la norma no es autónoma, sino que requiere para su aplicación de la disposición que regula propiamente la tipificación de la conducta derivada en lesión en sus diferentes tipos de manifestaciones, sin embargo, no por ello, la disposición carece de efectividad.

Ante la comisión del delito de violencia intrafamiliar nuestro Código Penal recoge en su arto 111Pn, las medidas de protección para la víctima de violencia intrafamiliar o doméstica, estableciendo éstas siempre que exista a petición de parte ante la autoridad judicial, lo que no es categórico, ya que al final del artículo se establece la facultad de que pueda incluso realizarse de oficio por parte del Judicial, incluyendo a la Policía Nacional y Ministerio Público.

En cuanto a las medidas de protección estatuidas en la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres y en particular en su acápite 24, establece medidas precautelares y medidas cautelares en el caso de las medidas precautelares que faculta al Ministerio Público y Policía Nacional a través de la Jefa de las Comisarias de la mujer y la niñez y de los Jefes de Delegaciones, Distritales y Municipales ordenar y adoptar, las medidas de Protección.

Es decir el abandono de manera inmediata al presunto agresor, prohibición y restricción al presunto agresor esto para garantizar la integridad de la mujer, además ordenar y garantizar, atención medica psicológica y psiquiátrica necesaria a las víctimas directas e indirectas de Violencia Intrafamiliar y prohibir actos de intimidación, acoso o perturbación contra la mujer, igualmente,

secuestrar, retener y prohibir arma de fuego o armas corto punzantes y otras medidas.

De igual manera levantar inventarios de bienes muebles existentes en el domicilio familiar con el fin de salvaguardar el patrimonio de la mujer e hijos, mismo que se ordenara llevar consigo aquellos bienes que garanticen el bienestar de la mujer y de grupo familiar, éstas medidas solo podrán ser adoptadas bajo el principio de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y urgencia.

En relación a la violencia contra las mujeres, la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, aprobada en su parte general y particular en Enero de este año dos mil doce, la cual no se encuentra publicada y vigente, establece de una manera integral en el art 8 las diferentes formas de violencia contra las mujeres y conceptualiza que las formas y ámbitos de violencia hacia las mujeres, constituye actos de discriminación y desigualdad de las mujeres en sus relaciones de poder, la cual es reconocida por el Estado como un problemas de salud, seguridad ciudadana.

Y, en particular, la norma evidencia que existen diferentes formas de violencia como son; la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, en el ejercicio de la función pública, laboral y la misoginia e incorporando el delito de femicidio en el art 9 de la Ley.

Es importante dejar claro que el delito de violencia domestica e intrafamiliar concebidas en nuestro ordenamiento jurídico Penal, aún vigentes constituye un adelanto en nuestra legislación, ya que las mismas no se encontraban reguladas, pese a que han existido Instituciones que han trabajado en razón de dicho problema, pero el hecho que la justicia penal hayan incorporado nuevos tipos penales constituye un apaleamiento para quienes se consideraron intocables e impunes.

En tal sentido existe un avance en esta materia, ya que nuestros legisladores recogieron como una realidad manifiesta en nuestra sociedad ese tipo de conductas y la incorporaron en una norma, elementos esenciales para su

configuración, requiriendo para su aplicación del auxilio de la norma que tipifica el Femicidio y otras conductas delictivas, las cuales no recoge nuestro Código Penal.

En este particular el legislador creó una unificación en una legislación específica, todos los delitos atinentes a la mujer, creando nuevas conductas y una mayor regulación a las existentes asumiendo una política criminal consecuente con el clamor de la sociedad de tipificar el delito del Femicidio o Feminicidio y las diferentes formas de violencia hacia las mujeres.

1.2- Concepto de Femicidio o Feminicidio.

El concepto de Femicidio o Feminicidio para la sociedad es útil conocerlo porque indica su carácter social y generalizado de la violencia basado en la inequidad de género y nos aleja de planteamientos individuales, naturales y patológicos que los mismos tienden a culpar a las víctimas y a representar a los agresores como “locos” fuera de control o animales o a concebir las muertes de mujeres como el resultado de problemas pasionales, producto de mitos, muy extendidos, esto porque se ocultan y niegan la verdadera dimensión del problema, las experiencias de las mujeres y la responsabilidad de los hombres.

El concepto de femicidio a nuestro entender ayuda a desarticular los argumentos que sostienen que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, como resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad.

La noción de Femicidio incluye, tanto los crímenes cometidos dentro de la llamada esfera “privada” como dentro de la “pública”, tal como lo expresa la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

En su Artículo 1 la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquiera acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

En este sentido el concepto de Femicidio no está explícitamente establecido en dicho instrumento lo cierto es que implícitamente lo establece, ya que la violencia contra la mujer conlleva como resultado la muerte.

En este contexto, para determinar si un homicidio de mujer es un Femicidio, se requiere conocer quién asesinó, como lo cometió, en qué contexto y en qué circunstancias lo cometió, cuales son los vínculos de consanguinidad, afinidad o afiliación del asesino con la víctima, dependencia económica de la víctima con el agresor etc., lo cierto es que se debe castigar con privación de pena a los agresores y victimarios con celeridad y rigurosidad por que la saña con que se matan a las mujeres de manera violenta, comparadas con el hombre es más cruel.

La discusión y del desarrollo conceptual sobre el femicidio no es recientes en el mundo y particularmente, en la región de América Latina. Hace treinta años, el concepto fue utilizado por primera vez en una tribuna de derechos humanos y desde ese momento hasta la fecha, su desarrollo no solo ha crecido enormemente, sino que se ha enriquecido con diversas posiciones y opiniones doctrinarias.

Según un estudio publicado por (Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) 2006) y el (Instituto interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2006), entendieron el concepto de femicidio como: *El femicidio, entendido como las muertes intencionales y violentas de mujeres (asesinatos, homicidios y parricidios), por el hecho de ser mujeres, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales y el internacional.*

Partiendo de esta definición se concibe que el femicidio es la muerte más violenta que sufren las mujeres a manos de sus maridos, esposos y ex compañeros, entendidos como una violación a los derechos inherentes y a sus derechos humanos como es la vida y que los sistemas internacionales jurídicos la protegen.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2009, p.15) cita a Russel (2006) quien utilizó el concepto en inglés en el año de 1801 en un artículo, para referirse al asesinato de una mujer. La misma Russell lo utilizó en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre crímenes contra las mujeres, realizado en Bruselas, ella lo define como “el asesinato de mujeres, por hombres, por ser mujeres.

De acuerdo Jill & Russel. (2006), citado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p,15) *sugirieron que el femicidio está en el extremo final del “continuum” del terror contra las mujeres... incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos , como la violación, la tortura, la esclavitud sexual) la prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil intrafamiliar, la agresión Psicológicas, el hostigamiento sexual)en el hogar, en las calles, en el teléfonos, en las oficina y en el aula de clase), la mutilación genital, la heterosexualidad forzada, las operaciones ginecológicas innecesarias, la esterilización forzada, la maternidad forzada)...por la criminación de los anticoncepción y el aborto), la denegación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, la cirugía cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la belleza.*

Carcedo & Sagot.(2004)Citado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2009, p, 15)) conceptualiza el *Femicidio como el asesinato masivo de mujeres cometidos por el hombre desde su superioridad de grupo; tiene que ver con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer y con circunstancias sociales que imperan en ese momento; para que se dé, tiene que haber una complacencia de autoridades, personas e instituciones que están en el poder, llamémosle poder político, económico y social.*

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007-2009, p, 19) cita a Lagarde (2004), la cual vincula el femicidio con la falta de acción del Estado: *identifica y atribuye que los crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: es la inexistencia del Estado de Derecho en el cual se produce la violencia sin límites y los asesinatos sin castigos. El Femicidio es un crimen de Estado, éste crimen se consume por que las autoridades, omisas y negligentes, ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. Verbigracia de esto, Nicaragua.*

D' Ángelo (2010) cita a Lagarde (2004, p.30) quien destaca el *femicidio como un crimen del Estado, que tolera los asesinatos de las mujeres y no investiga los crímenes con vigor ni hace que los asesinos asuman la responsabilidad*” en este sentido se puede decir que el Femicidio se puede ver como un crimen de Estado, esto, porque los Estados están comprometidos a tutelar los Derechos de los ciudadanos a si también protegerlos ante las injusticias cometidas en contra de ellos, porque no se puede hablar de Femicidio desde un concepto restringido sino desde un concepto amplio.

El Instituto interamericano de Derechos Humanos (2009p, 19) cita Carcedo (2007), quien afirma que *cuando hablamos de femicidio y de Feminicidio no estamos utilizando dos términos diferentes para hablar de lo mismo., cuando hablamos femicidio estamos hablando del concepto más básico, la forma extrema de violencia contra la mujeres o dicho de otra manera, cuando la violencia contra la mujer mata. Cuando hablamos de Feminicidio se requiere que haya impunidad.*

De estos conceptos podemos derivar, lo siguientes, y, es que en la región existe un debate a nivel teórico sobre la pertinencia del uso de la expresión femicidio ya que para ciertas actoras esta palabra solo aludiría al acto de dar muerte , a una mujer (equivalentes a homicidio), en tanto la expresión Feminicidio, permitiría incluir la motivación basada en el género o misoginia; agregan como elementos del Femicidio la impunidad (el hecho) o inacción Estatal frente a los crímenes, enfatizando la responsabilidad del Estado en ellos, o extienden su uso a agresiones que no necesariamente provocan la muertes de las víctimas.

La Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, en el título II apartado de Delitos y Penas capítulo Único, delitos contra la violencia hacia las mujeres y sus penas, establece el delito de femicidio, en su artículo 9.

Comete el delito de Femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, y en las siguientes circunstancias... Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima....f) Por misoginia...

En este particular la normativa recoge elementos y estereotipos de conductas de vieja data e intrínsecos para la comisión del delito además, la Ley asume que el delito de Femicidio se puede dar desde el ámbito privado y público desde diferentes escenarios y circunstancias de muerte.

Otras autoras definen el femicidio como el asesinato masivo de mujeres cometidos por hombres desde su superioridad de grupo, tienen que ver con los motivos, con las heridas que infringen en el cuerpo de mujeres y con circunstancias sociales que imperan en ese momento., para que se dé, tiene que haber una complicidad de Autoridad, personas e Instituciones que están en el poder, llamémosle poder político, económico y social.

De manera general podemos conceptualizar que el Femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida como la violencia ejercida por el hombre contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control esto Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y por violencia sexual.

Al hablar de Femicidio se refiere sin duda alguna a un delito con todas las características y componentes; como son el sujeto activo, el que da muerte, sujeto pasivo, la mujer como víctima y el móvil que es la causa del crimen. Tres elementos para determinar la tipicidad penal de este delito.

Cuando hablamos de muerte femicida no es una etiología médica legal, sino una forma cualificada especial de una muerte violenta, que exige un grado superior de investigación y hallazgos y sus elementos no solamente se nutren de los hallazgos de la autopsia.

Podemos decir desde el punto de vista médico forense anotar para su posterior registro, como una muerte femicida, aquella que reúna ciertas características como lo es, muerte violenta por determinado mecanismo lesivo en el que además se observan lesiones (múltiples) de diferente data y cronología, reflejo de la violencia ejercida de forma habitual y continuada, muerte violenta tras violación, muerte violenta de una masacre donde el denominador común ha sido la muerte de mujeres.

Muerte de una mujer dentro de una secuencia de muerte, donde el agresor o agresores dejan alguna firma o seña propia de identidad que las relaciona, muerte de mujeres que inicialmente no estaban asociadas y con motivo de la investigación tienen referencias comunes como edad, profesión, zona geográfica delimitada etc. y finalmente muerte de un conjunto de mujeres aunque sea en momentos cronológicos distintos pero con nexos de unión entre sí, dentro de la marcha a grupos violentos organizados.

Partiendo de las definiciones antes relacionadas de algunos autores, podemos definir el femicidio o Femicidio.

Femicidio. Asesinato de mujeres de Manera violenta desde el punto de vista privado y público.

Feminicidio. Es la forma misógina de violencia más extrema contra la mujer, Cuya concurrencia para su comisión atípica se necesitan de factores y circunstancias análogas al homicidio y que concluye con el asesinato de mujeres.

La Ley Integral de violencia hacia las mujeres tipifica y da un concepto de femicidio en su artículo 9 que establece:

Comete el delito de Femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, y en las siguientes circunstancias... Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima....f) Por misoginia...

1.3.- Tipos de Femicidios.

En la actualidad no existe un solo tipo de Femicidio o Feminicidio, dado a la diversidad de situaciones que en la realidad se han podido constatar, y que ha permitido que muchos investigadores, desarrollan una tipología que incluye básicamente cuatro tipos de Femicidios como lo son: Femicidio íntimo, Femicidio no íntimo, Femicidio por conexión y Femicidio en masa.

1.2.1.-El Femicidio íntimo.

Se entiende el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, convivencia o a fin a esta es decir, compañera de vida, hermana, prima, tía y otras.

1.2.2.-Femicidio no íntimo.

La (Red de mujeres contra la violencia (RMCV), 2011) conceptualiza las cifras de la siguiente manera:

Femicidios Íntimos: Crímenes cometidos por hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia. El femicidio íntimo, indica que no debe rotularse el asesinato de “pasional”, porque de este modo se esconden y se plantea como “natural” las situaciones de violencia extrema. Mujeres que fueron asesinadas a manos de sus esposos, ex pareja, papá, hermano, hijastro, novio, primo, padrastro y amigos.

1.2.3.- Femicidio por conexión.

Se hace referencia a los asesinatos de mujeres cometidos “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a otra mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida.

1.2.4.-Femicidio en masa.

Femicidio en masa muertes y asesinatos de mujeres como resultado de poder y de la dominación de los hombres, en ésta se incluye, por ejemplo, a las mujeres que mueren a causa del SIDA o por causas de la mutilación genital, ésta categoría también podría incluir a las mujeres muertas en los mal llamados asesinatos “por honor” o durante conflictos armados.

En un estudio presentado sobre femicidio, sugirieron que para operativizar estas diferentes categorías de femicidio y la realidad en nuestro país, parten de los siguientes indicadores, pareja ex pareja, otro familiar, pretendientes o acosador, clientes sexual, proxeneta conocido, desconocido, mafia u otras organizaciones delictivas y grupos no delictivos., los cuales concluyeron que en Nicaragua como

parte de centroamericano las mayorías de los femicidas fueron las parejas de las víctimas, seguido por otros familiares y ex parejas, que en total representa 63,15 por ciento de los femicidas.

En general, en la gran mayoría de los casos, se trata de personas con fuertes vínculos familiares, como padrastro y hasta hijos, para poder operativizar éstas diferentes categorías de Femicidios y la realidad en nuestro país (Álvarez Almachiara, 2010).

En un informe noestral de la (Red de mujeres contra la violencia (RMCV), 2011) de enero a Septiembre reportó que hubo un incremento en el año 2011 de 84,37% de crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes con relación al año 2010 que fue de 54 mujeres asesinadas, el mismo informe reportó que sigue prevaleciendo los esposos, desconocidos seguidos de sus ex parejas , los esposos siguen repuntando con el 24,7%, estos asesinaron a sangre fría a su pareja y en algunos casos frente a sus hijos e hijas, el mismo informe arroja que el objeto utilizado para asesinar es el arma de fuego como principal elemento utilizado seguido de arma corto punzantes y fuerza física.

El informe también reveló que el territorio con mayores incidencias de femicidios son los Departamentos de Managua seguido de la RAAS.

Según un diagnóstico realizado en la Costa Atlántica con relación a las Víctimas de VIF y las faltas penales (2008-2009) citado por Almachiara D' (2010, p.38) el estudio reportó resultados análogos, los agresores son en primer lugar los cónyuges, seguidos de sus ex parejas y en tercer lugar sus hermanos. Los delitos sexuales tienen como principales ejecutores a personas conocidas (no se especifica a quienes), en segundo lugar personas sin ningún parentesco.

1.3.1- Elementos y Manifestaciones que originan la muerte de mujeres de manera violenta para la comisión del femicidio.

1.3.1.- Desigualdad histórica.

La desigualdad histórica es un elemento o manifestación que conduce a la violencia de mujeres de acuerdo a comentario vertido. Anónimo. *¿Cuáles son las causas y consecuencias del feminismo? El cual establece la falta de equidad y respeto de los derechos básicos provocó que con el renacimiento comenzaran los principales brotes de pensamiento de equidad... y fue en el Renacimiento se desechan los atavismos religiosos y existe una apertura para la ciencia, el conocimiento y los derechos de todos los humanos (El Humanismo Romano).*

El mismo autor anónimo señaló que durante la Revolución Industrial, la lucha de clases y las tesis socialistas trata de romper las diferencias entre el vulgo y las personas con dinero y poder... y, *fueron los movimientos sociales desencadenan una revolución sexual, en donde muchos tabúes, son desechados y comienza el análisis de estos temas así como la apertura a abolir diferencias raciales, sexuales, discriminatorias etc. En pleno siglo XIX las mujeres comienzan a exigir los mismos derechos que los hombres: Trabajo justo y bien pagado, el sufragio universal, entre otros.*

Verbigracia de lo antes mencionado en particular nuestro país, los movimientos feminista así como otras de instituciones del Estado, preocupados(as) por la ola de violencia hacia las mujeres, y, las desigualdades que han existido y existen, propusieron la incorporación de una Ley que tipificase el Femicidio y otras formas de violencia ante la Asamblea legislativa Nacional nuestra y, que en la actualidad fue aprobada en su parte General y particular, y de la cual nos hemos referido y seguimos refiriéndonos.

Algunos estudios acerca del Femicidio con enfoque de desigualdad hacen ver que el Feminismo empieza a hacer estragos en la consecución de la equidad humana, pues divide el pensamiento en malos hombres y buenas mujeres. Por muchos años la mujer ha sido sinónimo de discriminación y menosprecio del hombre. Es

decir, el machismo se deriva de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer que se consolida con la división de las relaciones de parejas y clases.

El régimen patriarcal históricamente ha planteado el apoderamiento del hombre hacia la mujer, sin importar edad, sexo color o clase política como la antesala de menospreciar el rol de la mujer ante la sociedad, familia, trabajo; la mujer no tiene voz ni voto en decisiones que son propias del hombre lo que la hace desigual.

Desde nuestro punto de vista no cabe duda que la mujeres desde niña han tenido un comportamiento de sumisión, esto porqué históricamente se ha planteado que el hombre es más fuerte que la mujer, desvalorizándola solo por el hecho de serlo, ejemplo de esto es que en nuestros hogares familiares y más en las zonas de rurales a las mujeres se le da tarea de lavar, planchar, cocinar y servir a los hombres porque es ella la ama de casa y no el hombre y quien lleva la comida al hogar es el hombre y no la mujer, es a esto que se le llama desigualdad histórica , es decir patrones de conductas intrínsecos e históricamente enraizados.

Esto de acuerdo a la Revista Feminista Nicaragüense (la Boletina), 2010) afirma: las mujeres y hombres son seres humanos con iguales derechos, pero en la práctica esto no es así debido a las desiguales que parten una diferencia sexual. A las mujeres se les educa para ser sumisas, calladas obedientes educadas y serviciales. A los hombres se les fomenta que sean fuertes independientes, agresivos poderosos y hasta violentos para mostrar su hombría

De lo antes mencionado podemos decir que todas estas formas de violencia las vemos bajo un enfoque no muy integral porque las mismas no se ven el problema de fondo, dado que la cultura patriarcal y las modalidades que se adquieren en cada sociedad o en cada país en particular a la nuestra depende de patrones de conductas que se encuentran en cada una de las sociedades que no poseen un balance de equidad de género.

En la actualidad Nicaragua es parte de dos instrumentos internacionales y otras, importantes como son; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujer “convención de Belem do Para” y la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) y

que ambos instrumentos regionales internacionales buscan un equilibrio y balance en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres y erradicar, sancionar y castigar la violencia hacia las mujeres en las legislaciones internas de cada país, mismos instrumentos jurídicos que fortalecen la igualdad, penalidad, y sanción de la violencia hacia las mujeres.

De lo anterior se deriva que en nuestro ordenamiento interno, Nicaragua posee muy pocas leyes que se ajusten a la realidad nacional, en cuanto a la violencia intrafamiliar y leyes de igualdad de género, podemos mencionar, La ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y oportunidades, Ley de Paternidad responsable, Código Penal de Nicaragua y finalmente la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que establece la figura Penal del Femicidio como muerte violenta hacia las mujeres.

1.3.2 Factor social.

Peixoto & Rodríguez definen que *la violencia no es algo marginal ni un pequeño problema, sino un problema inmenso de la sociedad y debe estar en el centro del debate político, ha, quien ha considerado que la violencia supone una violación de los Derechos Humanos y los gobiernos deben ser instrumentos de defensa de los derechos fundamentales (p.113).*

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1993 la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994), citada por Martínez (2007. p 3).en la que cita.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer es el primer instrumento internacional de derechos humanos que aborda la violencia de género a la que define como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

E incluye "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que

atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

Debemos de tomar en cuenta, que el factor violencia, no se debe de ver de manera restrictiva sino compleja, esto porque, al hablar de violencia no es únicamente lesión física sino ésta conducta delictuosa posee otras manifestaciones de violencia, física, psicológica, económica, patrimonial, sexual etc., las cuales constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Viano (1987) citado por Corsi (s/f. p.4) señala:

Que en nuestra sociedad, la persona clásica de alto status social es el varón adulto de clase alta. La violencia dirigida a tal persona es verdaderamente tabú. Cuando la violencia afecta a otras personas, ya sean mujeres, niños, pobres o minorías, entonces esto será percibido, en diferente grado, como menos censurable”. Por lo tanto, la violencia se naturaliza siguiendo la lógica de la construcción social y cultural del poder. El uso de la fuerza como forma legitimada de ejercicio del poder transforma a múltiples formas de la violencia en “naturales”.

Antes los planteamientos aseverados por los autores arribas descritos, podemos decir que la violencia hacia las mujeres es considerado un factor social, esto partiendo desde el punto de vista de quienes consideren que lo es, y no aquellos grupos significativos de la sociedad que así lo percibe y los cuales considera ciertas circunstancias como problema y sitúa acciones para darle soluciones, esto porque los problemas sociales no tienen existencia por sí mismo sino que es producto de un proceso colectivo.

Es decir que para solucionarla debe de existir una voluntad de grupos en colectivos, que involucre al Estado, Sociedad Iglesia, Instituciones legislativas Administrativa la cual se materialice con la aprobación de Leyes que radiquen las mismas con rigurosidad.

Así mismo podemos concretizar que la violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres tanto en el ámbito público y privado, social, económico, religioso y político, pese a todos los esfuerzos de las legislaciones internas en favor de la igualdad misma violencia que atenta contra el derecho a la vida, integridad, física psíquica, seguridad, libertad consagradas en nuestra legislación Nacional., Convenios y Instrumentos Regionales que Nicaragua a ratificado.

De tal manera que el control que tienen la mayoría de los hombres hacia las mujeres en el ejercicio del poder, es la vigilancia de poder, es decir dicho manejo le permite al hombre que a la esposa, compañera de vida, ex compañera, manejarla a su gusto y antojo, prevalecer su poder encima de otra sin importarle lo que piensan, que en la gran mayoría se produce la muerte violenta a manos de los hombres que a la fecha según la Red de mujeres contra la Violencia en el primer semestre de (enero- septiembre. 2011)son sesenta y cuatro (64).

1.3.3.- La violencia intrafamiliar como antecedente al Femicidio.

La violencia doméstica e intrafamiliar es un tema que por sí solo genera mucha polémica dentro del marco de las diferentes ciencias que se ocupan del estudio de la conducta del ser humano, especialmente de quien hace uso de éste tipo de práctica.

Ante la percepción de este tipo de conducta, giran demasiadas interrogantes y a como se señaló, no pueden ser resueltas a través de una sola respuesta, el derecho Penal tiene que acoger los hechos y juzgar sobre ellos.

La violencia intrafamiliar es un fenómeno, cuyo origen no podemos determinar en una fecha exacta, es la época e ignorancia, si determinadas conductas pueden ser consideradas naturales para algunas sociedades, como una cuestión cultural.

A razón de todo lo antes relacionado y la relevancia a nivel mundial del aumento de violencia hacia las mujeres, esto, se concretizó en las diferentes convenciones declaraciones y que Nicaragua es suscriptor.

Los antecedentes de Femicidios son partes de los factores de riesgo, sin embargo es importante tratarlos separadamente para su mejor comprensión, es necesario el estudio de los Femicidios, analizar los antecedentes de violencia que han precedido al asesinato, de estos antecedentes hay que tomar en cuenta, la persecución de la víctima por parte del femicida

En definitiva se trata de identificar las distintas formas de violencia ejercida por el victimario con el que la mujer tiene una relación íntima o la tuvo.

En Nicaragua, la violencia intrafamiliar, se encuentra regulada en nuestro Código Penal Nicaragüense, en su artículo 155 Pn. Violencia Domestica o intrafamiliar, que prevé, que para la existencia de este delito debe de existir circunstancias de violencia, física, síquica o intimidación, que sea o haya sido cónyuge o conviviente o unión de hecho estable... afectividad o consanguinidad... que resulten lesiones leves, graves y muy graves con penas que van de un año a doce años dependiendo de las gravedades e inhabilitación especial de los derechos derivados de la relación Padre, Madre e Hijos, guarda y tutela.

Además del delito de violencia intrafamiliar tipificado en nuestro ordenamiento jurídico Penal, debemos de hablar de los tipos de violencia que constituyen el camino al Femicidio que nuestra legislación vigente no establece y.

De acuerdo al (Movimiento de mujeres, trabajadoras y desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC), 2011) definen: *Violencia Física: Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.*

Ejemplos del concepto anteriormente descrito, heridas, moretes, golpes, quemaduras, dislocaciones etc.

La (Feminista Nicaragüense (la Boletina), 2011) define la Violencia sexual:

La violencia sexual cuando una o varios hombres se imponen por las fuerzas o amenazas para someter sexualmente a una mujer. (p.4).

Ejemplo de la definición anteriormente señalado, acto o el intento de consumir un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para comercializar o de utilizar de cualquier modo la sexualidad bajo intimidación fuerza amenaza, chantaje, la negación de utilizar métodos anticonceptivos y las inspecciones para comprobar la virginidad.

La (Red de mujeres contra la Violencia (RMCV), s/f), establece y define la Violencia:

Violencia Emocional o psicológica.

Es toda acción u omisión que dañe la autoestima, la identidad, o el desarrollo de otra persona. Se trata de acciones o conductas encaminadas a controlar o limitar la autonomía de la persona agredida. Este tipo de violencia tiene como objetivo dañar la salud mental y la estabilidad emocional de la víctima.

Ejemplo, insultos ofensas, gritos, menosprecio al valor personal o la dignidad.

De acuerdo al (Movimiento de mujeres, trabajadoras y desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC) 2011) define.

Violencia económica:

Cualquier conducta que pretende negar limitar el acceso de las mujeres a recursos destinados a satisfacer las necesidades.

Ejemplo, abuso o control abusivo del dinero, recompensar o castigar a través del dinero, controlar o limitar o prohibir la inserción al empleo.

La “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, define en su artículo 12

Violencia patrimonial y económica.

La acción u omisión ejercida por un hombre en contra de la mujer, con la que se halle o hubiere estado ligada por relación de consanguinidad, afinidad, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novias, ex novias, relación de afectividad, y que de cómo

resultado cualquiera de las conductas siguientes: Sustracción patrimonial, daño particular, limitación al ejercicio del derecho de la propiedad, sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares, explotación económica de la mujer, y negación de prestar alimentos.

Esta misma normativa antes referida. Define en su artículo 16: Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer.

Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual está acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un período de tres a seis meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Ejemplo, controlar, obstaculizar e impedir la buena función de la mujer en cargos de dirección o administrativos.

En la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, define en su artículo 15 la violencia Laboral.

Quien impida o limite el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres, a través del establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio, prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos días multa.

Podemos decir que estos son algunos de los antecedentes y formas de violencia intrafamiliar y que han precedido para los asesinatos de las mujeres como camino al Femicidio que en lo que va del año de acuerdo a la (Red de mujeres contra la violencia (RMCV),2011) conceptualiza las cifras de la siguiente manera.

Mujeres asesinadas 76

Femicidios Íntimos: Crímenes cometidos por hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia.

El femicidio íntimo, indica que no debe rotularse el asesinato de “pasional”, porque de este modo se esconden y se plantea como “natural” las situaciones de violencia extrema. Mujeres que fueron asesinadas a manos de sus esposos, ex pareja, papá, hermano, hijastro, novio, primo, padrastro y amigos.

Femicidios no Íntimos: Asesinatos contra mujeres cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, No existía vínculos familiares ni de convivencia. Incluimos a 5 mujeres nicaragüenses asesinadas en otros países.

Femicidios por conexión: Mujeres asesinadas en la “línea de fuego”. Cuando un hombre trata de matar a una mujer; es el caso de mujeres, parientes, niñas u otras que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del victimario. Para un total de 76 femicidios.

Estos son las distintas expresiones de violencia contra las mujeres y que en definitiva son elementos necesarios para dar muerte a las mujeres de manera violenta es decir que las estadísticas y datos relacionados demuestran que todos los casos de violencia intrafamiliar se llevaron a cabo por una relación circunstancial, íntima, no íntima y por conexión que son manifestaciones que se materializan en el delito de Femicidio.

1.3.4.- Misoginia.

Otro de los factores o elementos que causan la violencia hacia las mujeres es la misoginia, que en su concepto general, es el odio, repudio e intolerancia hacia las mujeres y que conlleva ha asesinatos, homicidios, violaciones, etc.

Al hablar de Misoginia es discutir de la violencia intrafamiliar de manera integral porque ambos están ligadas a una misma realidad, como lo es la violencia hacia las mujeres, la cual debemos de entender que es cualquier acción o conducta, basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual psicológico a la fémina, tanto en su ámbito público o privado.

Kofi Annan Secretario General de las Naciones Unidas (s.f) citado por (El Movimiento María Elena Cuadra (MEC), 2011) definió, *la Violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas, mientras continúe, no podemos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.*

La Ley integral contra la violencia hacia las mujeres en su artículo 8 inciso g, concibe la misoginia como conductas de odio hacia las mujeres, manifestado en actos violentos y crueles contra ella por ser mujeres, es decir que la misoginia adolece discriminación hacia las féminas, y segundo constituye desigualdad histórica ante los hombres en su relación de poder.

De acuerdo al Movimiento de mujeres María Elena Cuadra (2011. P.8). La misoginia es cualquier conducta de odio contra la mujer, puede manifestarse en rechazo o desprecio y discriminación contra las mujeres evidenciadas de manera directa o indirecta a través de la .violencia sicológica, física sexual, económica patrimonial y el Femicidio o Feminicidio.

Claro está, que la misoginia evidencia y retoma conceptos patriarcales enraizados en la sociedad y que el hombre lo manifiesta a través de una actitud de violencia hacia las mujeres, utilizando métodos crueles, explotación sexual, tortura violación, y, asesinatos y otros ilícitos penalmente sancionado en nuestra legislación

Podemos señalar que existen algunas características para poder determinar cuándo sufre la mujer de misoginia y cuando se toleran.

Se ignora, silencio, invisibiliza, desvaloriza, o se le quita importancia a la violencia contra las mujeres, se tolera la discriminación contra las niñas en las escuelas.se despiden a una mujer trabajadora embarazada, se considera violencia como algo natural, se tolera publicidad ofensiva para las mujeres y se intenta justificar la violencia contra las mujeres con falsos pretextos y no se sanciona. Asimismo se paga un salario menor a una mujer por hacer igual trabajo o similar trabajo al de un hombre.

En conclusión podemos decir que la misoginia es uno de los factores que debemos de tener en cuenta ya que éste es el inicio de todo una consecuencia post morte de una mujer y que cada día hay un mayor repunte e índice de mortalidad de las mismas, porque muchos de los hombres consideran que las mujeres son objetos que pueden hacer y deshacer con ellas lo que quieran.

2.- Ordenamiento Jurídico Nacional referido a la violencia intrafamiliar e igualdad de condiciones en materia de Derechos Humanos.

2.1.-Constitucion Política de Nicaragua.

La “Constitución Política de Nicaragua, emana en su artículo 5, principios de la nación, la libertad; la justicia; el respeto a la Dignidad de la Persona Humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas formas de propiedad; la libre Cooperación internacional; y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

Además la carta magna proclama en el título IV, los catálogos de garantías constitucionales de todos y todas los y las ciudadanos(as) definiéndolas como Derechos y deberes y garantías del pueblo Nicaragüense, y que además el artículo 27 consagra la igualdad de derechos y protección de los mismo, sin discriminación y sin exclusión de condiciones de nacimiento, raza credo, político sexo religión, opinión posición económica o condición social.

De conformidad a la Constitución Política de Nicaragua, en el particular artículo 36, establece, el derecho de todas las personas, a que se respete su integridad física, psíquica y moral y al derecho inherente y humano a que nadie será sometido a tortura procedimiento, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes mismo que constituye un delito penado por la Ley.

Analizando éste acápite antes descrito, la misma norma sienta su base jurídica en la legislación Nacional para abordar la problemática de la violencia intrafamiliar y femicidio de manera implícita pero con una relación fáctica como una nueva figura delictiva, condenable y reprochables para quienes dan muerte a las mujeres en su ámbito público y privado, y.

Que además el Estado de Nicaragua al ser suscriptores de instrumentos internacionales regionales como son “Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujer “convención

de Belem do Para', está obligado a reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos humanos.

Otro de los fundamentos constitucionales, es el artículo 48, el cual reconoce la igualdad incondicional entre hombres y mujeres para el ejercicio pleno y efectivo de participación económica, social y política, llegando a materializar lo siguiente:

Primero; porque, nuestra carta emana derechos y deberes en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres si exclusión alguna.

Segundo, porque, la misma Constitución, tutela derechos y da protección a que los mismos se cumplan con rigurosidad, justicia y plenitud y se incorporen en leyes y procedimientos legales justos y efectivos para todo(as) los (as) ciudadanos(as) nicaragüense.

Tercero y fundamental, nuestra carta magna hace efectiva estos derechos y deberes, a través de garantías constitucionales para su debido cumplimiento.

Debemos de señalar que la constitución Política de Nicaragua, si bien es cierto, no establece el delito de Femicidio como tipo Penal, la misma norma constitucional sí reconoce y consagra el reconocimiento Constitucional de los derechos humanos, derechos individuales, derecho a la vida, la integridad física, psíquica y moral, a no estar sometida a torturas, al respeto de la honra, a la dignidad, y a la libertad personal, la seguridad, la capacidad jurídica; también reconoce ampliamente los derechos de las personas detenidas y las procesadas.

Sin embargo es necesario establecer garantías mínimas para todas aquellas personas víctimas de VIF, porque de nada sirve el reconocimientos y tutela de los derechos de todos y todas los ciudadanos(as) en igualdad de condiciones establecidas en nuestra carta fundamental, si el Estado a través de sus operadores de justicia no las cumplen.

2.2.- Código Penal Nicaragüense.

El 13 de Agosto de 1996 se aprobó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar: denominada, Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Ley 230), misma que se encuentra derogada.

Dicha reforma reconoció el derecho de las mujeres a “vivir libres de violencia” por medio de la cual, se logró reconocer que todas las formas de violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar son constitutivas de “delito”, pero además reivindicó el derecho a la integridad psicológica que pasa a formar parte del ordenamiento jurídico Nicaragüense como un delito de orden público.

Esta Ley reformó el Código Penal en los siguientes aspectos:

- El establecimiento de medidas de seguridad (como medidas disuasorias, etc.):
- Inclusión de los daños psicológicos entre los delitos penales y el reconocimiento de que estos daños pueden ser consecuencia de la violencia doméstica,
- Asimismo antes de esta reforma tan solo se reconocían las heridas visibles (físicas), situaba algunos actos de violencia doméstica en la esfera de lo penal en vez de tratarlos solo dentro del contexto civil o familiar, y,
- y finalmente la abolición del delito de adulterio.

Otro de los antecedentes en materia de violencia a nuestro código penal es la Ley 150 de Reformas al Código Penal de 1992, que incluyó la reforma al capítulo VIII del Libro del Código Penal referido a: “De la violación y otras agresiones sexuales y que en la actualidad se encuentra derogada, entre los elementos importantes de esta Ley y de reforma esta lo siguiente:

- Expresamente se estableció que los delitos de violación se cometen cuando se hace uso de la fuerza, intimidación o cualquier otro medio que prive la voluntad, razón, o del sentido a la Persona y que tenga como consecuencia acceso carnal con ella o que introduzca cualquier instrumento u objeto.

- Además que se presume esa falta de conocimiento y de voluntad cuando la víctima es menor de 14 años, señalándose que la pena será entre 15 y 20 años.
- Se incorporó como agravante el daño a la salud física que sea pariente, persona discapacitada física o mentalmente, cuando existiera entre el actor y la víctima relación de autoridad o dependencia, cuando se transmita una enfermedad grave por contacto sexual, y finalmente.
- Se señaló que en cualquier caso cuando la víctima sea menor de 10 años se impone pena máxima.

Con la entrada en vigencia del Código Penal Nicaragüense, en su artículo 155Pn, el cual establece una nueva modalidad o tipo penal como es la violencia doméstica e intrafamiliar, que vino a configurar el tipo penal a partir del resultado es decir, violencia hacia las mujeres, y que por si solo se penalizan los hechos que causan alguna lesión, o se penaliza una gama de conductas que atentan contra la libertad sexual.

Lo cierto es que el mismo incluyó en su parte sustantiva, una figura penal que no se encontraba penalizado, y que viene a discernir la necesidad de incorporar otros tipos y conductas penales, ante un ordenamiento jurídico penal muy deficientes en temas de leyes modernas, particular, en materia de violencia extrema constitutiva de violación y muerte de mujeres.

Al entrar en materia y procedimiento, nuestro Código Penal en su, artículo 111Pn penaliza, sanciona y dicta medidas de protección a favor de las mujeres ante el ilícito cometido por el varón.

Mismas que establecen medidas de urgencias para la víctima de violencia intrafamiliar o doméstica bajo dos circunstancias, que la acción u omisión la cometa un miembro de la familia, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad dentro de la familia conviviente

O en unión de hecho estable, y que la autoridad judicial del lugar donde ocurrió o a petición de parte podrá aplicar, según el caso las siguientes medidas.

Ordenar, prohibir o restringir el abandono inmediato del hogar del imputado o acusado aun radio máximo, restringir la presencia de la persona denunciada en la casa de habitación de la ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo de ciento cincuenta metros asimismo ordenar la reintegración de la persona ofendida al hogar del que fue sacada con violencia o intimidación.

Prohibir o limitar la presencia de la persona denunciada al lugar del trabajo de la persona ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo de ciento cincuenta metros, garantizar y ordenar a la persona ofendida la atención médica, psicológica o psiquiatra, en caso de que sea necesario.

A la igual atención se someterá en caso necesario a la persona denunciada para su rehabilitación y evitar la reincidencia, el examen Bio-Psico-Social a los menores de edad involucrados en hechos de violencia doméstica o intrafamiliar y brindarle su debida atención.

En caso de que la víctima sea un menor de edad o persona con problemas de discapacidad, la autoridad judicial competente podrá confiar provisionalmente la guarda protectora a quien considere idóneo para tal función, si estaba confiada al agresor; prohibir toda forma de hostigamiento que perturbe la tranquilidad de la ofendida u ofendido incluyendo los medios electromagnéticos o de otra índole; Ordenar el decomiso de arma a la persona denunciada.

En los casos de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica las medidas serán aplicadas por la autoridad comunal de acuerdo con el derecho consuetudinario y las leyes vigentes, el Juez o Tribunal podrán ordenar las medidas de protección referidas en los incisos anteriores al momento de tener conocimiento de los delitos.

Para su cumplimiento, podrá solicitar el auxilio de la Policía Nacional, en caso de incumplimiento por parte del imputado a la medida de protección ordenada por el juez, este procederá a aplicar una medida más grave, a instancia de parte

De conformidad al arto 566 del Código Penal Nicaragüense, son los jueces técnicos los que realizarán los juicios por delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado.

Esta disposición es aplicable también a los delitos contenidos en los siguientes capítulos: delitos contra la libertad e integridad sexual; lavado de dinero, bienes o activos; delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; terrorismo; cohecho; tráfico de influencias; peculado; malversación de caudales públicos y fraudes y exacciones.

Todas estas reformas a nuestras leyes y Códigos Penales, los consideramos novedosos, ya que se ha venido reconociendo de manera gradual el derecho de las mujeres que sufren maltrato intrafamiliar a vivir sin violencias, además en los mismos se agregan procedimientos para el sometimiento a la justicia cuando los derechos de las víctimas son vulnerados por sus agresores aunque los mismos no sean tan eficaces en cuanto a su cumplimiento.

Partiendo de la parte sustantiva anteriormente señalada, nos damos cuenta que en nuestro Código Penal vigente, en ningún acápite, establece una penalización de las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público o privado, y establece medidas un poco soñolientas para el agresor, es decir dichas medidas requieren de mayor rigurosidad en cuanto a la gravedad del hecho y el resultado del mismo.

Ha de notar importancia en lo referido en la Ley integral contra la Violencia hacia las mujeres, que la misma en sus apartados recoge las diferentes conductas delictivas como son, violencia física, violencia psicológica, maltrato, violencia laboral, violencia institucional, Femicidio etc., de una manera más integral, no así como lo establece el Código Penal Nicaragüense.

Todas estas conductas delictuosas referidas antes, vienen a llenar los vacíos legales al incorporar nuevos delitos como el Femicidio o Feminicidio que nuestro ordenamiento Jurídico no establecía, aunque para algunos atenten y violan preceptos constitucionales.

Ejemplo, de estos es que la Ley integral contra la Violencia hacia las mujeres, faculta y da más autonomía a las comisarías de la mujer en lo que hace a emitir orden de detención en caso de violencia y dictar medidas preventivas (ver artos 24 y 49) de la referida Ley, que algunos tratadistas y juristas refieren que esta ley violenta el art 33 numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua que dispone que la detención solo podrá emitirla un juez competente por mandamiento escrito, a razón de esto, lo cierto es que los delito en su ámbito público son perseguibles de oficio

Una de los aspectos que se relacionan con la figura del Femicidio es el Parricidio y que nuestros judiciales aplican, como consecuencia de la muerte violenta de la mujer, dado que la “Ley No.641: Código Penal Nicaragüense, define *en su artículo 138 pn*

Quien, a sabiendas del vínculo que lo une, prive de la vida a su ascendiente, descendiente, hermano, conyuge o conviviente en unión de hecho estable, será sancionado con una pena de quince a veinte años de prisión. Si concurriere alguna de las circunstancias de asesinatos, la pena de veinte a veinticinco años de prisión.

Por otra parte ha de hacer notar que de acuerdo a nuestro Código Penal, en particular el art 140, Pn define el asesinato:

El que prive de la vida a otra concurriendo algunas de las circunstancias siguientes;

a) Alevosía, b) Ensañamiento, Y, c) Precio recompensa o promesa remuneratoria.

Se le impondrá una pena de quince a veinte años de prisión.

Cuando concurren dos o más de las circunstancias señaladas en este artículo, el responsable de asesinato será penado con prisión de veinte a treinta años

De los artículos arriba señalado arrojan elementos y antecedentes penales que si se retoman de una manera más elemental, tendríamos una base jurídica más sólida y rigurosa para penalizar de manera explícita y menos interpretativa la VIF

en todas las gamas y conductas en una solo delito que es el Femicidio, que por Decreto Ministerial número 67-96 del Ministerio de Salud, se reconoce que la violencia en contra de las mujeres es un problema de salud pública y orienta a que el Estado debe emprender acciones para su atención.

2.3. Ley 648 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades y su reglamento.

La Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades y su reglamento (Gaceta N° 51," 2008) fue aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de febrero del año dos mil ocho y su reglamento (Decreto 29-2010), aprobado en ("Gaceta Diario Oficial No. 121," 2010).

Esta ley de manera general, garantiza los derechos humanos de las mujeres, los cuales son integrales e indivisibles, así mismo obliga a las instituciones del estado a formular políticas públicas, es decir mayor acceso a la educación salud, justicia, trabajo e información, garantizar los derechos laborales de las mujeres, prevención, atención y detección de la violencia en contra de las mujeres y la familia, equidad en el acceso de las mujeres a los espacios de poder y toma de decisiones.

Además planes programas y proyectos para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, económicos civiles, políticos, económicos sociales y culturales.

En cuanto al mecanismo de aplicación y seguimiento. El arto 30, de la "Ley No. 648 Gaceta 2008), faculta al Instituto Nicaragüense de la mujer (INIM), como órgano rector de aplicación de la presente Ley, dar seguimiento y cumplimiento a las políticas públicas con enfoque de género en cuanto a la coordinación, formulación, ejecución en todos los poderes del Estado e instituciones administrativas, Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, municipalidades, y otras, al mismo tiempo dar asesoramientos.

En este sentido el Estado de Nicaragua no cuenta con un mecanismo Nacional que vele por la formulación e implementación de políticas públicas para la igualdad

de derechos y oportunidades a pesar de la aprobación y reglamentación de la “Ley No, 648 Gaceta 2008), Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades(lido), el Estado no cuenta con el mecanismo necesario para articular los acuerdos internacionales con el conjunto de políticas públicas, evidenciándose la falta de voluntad política para la formulación e implementación de políticas públicas que favorezcan el adelanto de la mujer.

La LIDO y su reglamento en el capítulo II, art.36 establece como de obligatorio cumplimiento la Creación del Consejo Nacional por la Igualdad coordinado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM, y a la vez en su numeral 2, inciso contempla la creación de dos delegadas de organizaciones de mujeres de carácter Nacional.

Este Consejo Nacional, en conjunto con instituciones del Estado serán las encargadas de coadyuvar el diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de igualdad de género y de dar cumplimiento de la presente Ley.

Aunque el arto 45 de la LIDO se establece que el Consejo Nacional por la Igualdad debe ser instalado por el Presidente de la República en un plazo de sesenta día a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y que le corresponde al INIM convocar a sus integrantes, al momento de finalizar informe no se conoce a través de medios, escritos, televisivos y radiales, ninguna convocatoria por parte del INIM para la conformación del Consejo, no existe ningún mecanismo de interlocución entre organizaciones de mujeres y el INIM, prevaleciendo una total negativa a brindar información y coordinar acciones con organizaciones de mujeres que no forman parte de las estructuras del gobierno como garante del cumplimiento de la Ley.

Lo anterior nos permite afirmar que el INIM continua siendo un ente carente de autonomía política administrativa, que además no dispone de recursos necesarios para cumplir la función de rectoría de políticas públicas en materia de igualdad y equidad, por el contrario la limitada acción pública del Instituto, lo ubica como

mero ejecutor de proyectos de corto alcance que al privilegiar un enfoque familista, no abona al empoderamiento integral de las mujeres como sujetos de derechos.

Por último la Procuraduría de derechos humanos, investigará, fiscalizará, denunciará, informará y ejercerá las acciones legales para la defensa, protección y restablecimiento de los Derechos Humanos violados por las mujeres.

2.4. Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No.641, Código Penal

Con la Aprobación, solo en lo general, de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres por la Asamblea Nacional, esta normativa Jurídica viene a darle un enfoque integral al tratamiento y abordaje de la violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, en virtud que es una Ley estructurada desde todos sus enfoques.

Primeramente, porque Nicaragua debe de cumplir compromisos internacionales al ser suscriptor de Belem Do Pará y parte del protocolo de la CEDAW, que establece que como Estado tiene la obligación de incorporar al ordenamiento interno todas aquellas leyes que vienen a darle un tratamiento integral desde el punto de vista de la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra las mujeres., ésta violencia es solamente vista desde el ámbito privado que es lo que entendemos por violencia intrafamiliar(Vif) sino vista, la violencia que sufre la mujer desde el punto de vista público.

Segundo porque, Nicaragua asume por completo que la violencia hacia las mujeres no solamente es física o psicológica, que fue un avance de la Ley 150, y posteriormente la Ley 230, sino que ésta Ley Integral de Violencia Hacia las mujeres, reconoce en sus partes sustantivas que la violencia que sufren las mujeres es física, psicológica, sexual, patrimonial, laboral visto desde el ámbito privado y público.

Es una Ley que como país o Estado trata el problema de la violencia hacia las mujeres, de manera más estructural, funcional y organizada las distintas

manifestaciones y comportamiento delictivo de cómo se discrimina a las mujeres por el hecho de serlo, como que no existiese los derechos de las misma.

Verbigracia de lo antes mencionado es que la Ley en su objeto la misma, plantea “proteger los derechos humanos y garantizarles una vida sin violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación”. Pero la pregunta sigue siendo ¿Habría voluntad política” para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres?, ¿Cuál es el mecanismo legal para garantizar a las mujeres, seguridad y liberarlas de la violencia en todas sus manifestaciones?

La Ley está enfocada a la víctima de violencia desde el punto de vista público y privado, es decir visibiliza a la víctima sus derechos y no la re victimiza como sucede en la actualidad.

Uno de los aspectos más importantes además de los antes relacionado, es la tipificación del delito de Femicidio, mismo que no estaba tipificado en nuestro ordenamiento Jurídico y que la Ley establece el Artículo 9.

Femicidio: Comete el delito de Femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
- b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela.
- c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo.

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

f) Por misoginia

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

h) Cuando concorra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.

2. Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicara la pena máxima.

3. Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio cuando concorra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión.

Al analizar este tipo penal del delito de femicidio, así como está planteado, afirmamos que el mismo, es lo más novedoso desde el punto de vista normativo interno, porque se cuenta con un instrumento jurídico Penal y procesal, es decir un mecanismo de control, defensa, sanción, protección, castigo y, tratamiento del tipo penal para aquellos agresores y victimarios que cometen algún hecho delictuosos en contra de las mujeres.

En cuanto a las medidas de protección o prevención para las mujeres víctimas de violencias, se establecen dos tipos de medidas como son; las precautelares y medidas cautelares, la primera es adoptadas por la Policía Nacional y Comisarias de la mujer y la Niñez, los jefes de delegaciones distritales y municipales o el Ministerio Público, y, por ende éstas Autoridades podrán ordenar y adoptar las medidas precautelares. En cuanto a las medidas cautelares la podrán realizar el Juez o Tribunal a solicitud del Ministerio Público o de la víctima constituido en acusador particular.

Con esta nueva Ley, se prohíbe la mediación, ya que en la actualidad la mediación, se encuentra contemplada en el Código Penal de Nicaragua y que en muchos casos coadyuva a las muertes de las mujeres, y, que según datos proporcionados la mediación es sinónimo de asesinato. (Ver arto 46).

Otro de los avances positivos de esta Ley es la creación de un órgano rector que es el comité de violencia que el mismo le va a dar seguimiento a la implementación de la Ley.

Un avance importante de esta Ley, es la autonomía de las comisarías de las mujeres, niñez y adolescencia, porque, dicha dirección va a procesar los ingresos e egresos de todo lo que tenga que ver con los delitos contra la mujer. Además las jefas de las comisarías de las mujeres, bajo su responsabilidad personal podrán emitir orden de detención (arto 44 Ley integral de violencia hacia las mujeres).

Las comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, dará seguimiento y tratamiento a los ilícitos penales en coordinación con otras instituciones de acuerdo a los protocolos de actuaciones aprobadas.

Otro avance, es la creación de la comisión interinstitucional que va a dar seguimiento a todo lo concerniente a la mujer, gestionar recurso para todas las instituciones del Estado.

Por saneamiento procesal, en cuanto a la comisión Interinstitucional, a nuestro criterio se debió de incluir organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el tema de seguimiento y monitoreo de muertes de mujeres, esto porque muchas instituciones del Estado, entes autónomos centralizados y descentralizados ocultan informaciones de las realidades de las mujeres.

Esta normativa crea jueces especializados en el tema de Violencia contra la mujer y femicidios. Independientemente de un juez especializado puede conocer local, Distrito dependiendo de los daños y circunstancia, dándoles más facultades a los juzgados únicos o locales en lugares aledaños.

Plantea políticas públicas de protección integral hacia la víctima de violencia, asegurando su acceso rápido, transparente y eficaz, lo que a todas luces es bueno, pero si no hay presupuesto, será solo papel mojado.

En la actualidad las mujeres que sufren violencia económica por negar la pensión alimenticia a sus hijos por parte de los padres irresponsables y esperan más de 6 meses para obtener al fin una pírrica pensión y no se habla o se plantea nada en concreto para terminar con esa violencia y así se estaría promoviendo y haciendo efectivo del principio del interés superior del niño.

Abarca todos los vacíos legales del Código Penal de Nicaragua en su objeto y ámbito de aplicación a nivel de Normativa interna que vienen a complementar instrumentos jurídicos ya existentes.

Por ejemplo el Código Procesal Penal, establece el anticipo de prueba bajo dos circunstancias; de muerte o que no sea residente del país hecho que es utilizado por los abogados en lugares aledaños como estrategias de defensa por ejemplo cuando la víctima viene de un lugar largo y llega a la cabecera departamental miran que llegue la víctima, inmediatamente solicitan reprogramación esto para desgastar a la víctima económicamente, lo que conlleva a que la víctima no vuelva a llegar.

Ahora con el anticipo jurisdiccional de prueba, en la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, el Fiscal o el abogado acusador particular podrá solicitar el anticipo de prueba personal, en los delitos señalados en la presente Ley, artículo 44 cuando:

A) La víctima o testigo corra el peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia. Amenaza, oferta o promesa de dinero u otros beneficios análogos;

b) Por razones de reprogramación, suspensión o interrupción del juicio oral y público, la víctima se ve imposibilitada de presentarse o prolongar su permanencia en el asiento del tribunal para acudir a la nueva convocatoria de juicio, cuando el domicilio de la víctima se encuentre alejado del asiento del tribunal, que haya poco acceso a medios de transporte por ser éstos limitados y

por no disponer de recursos económicos suficientes para garantizar su estadía y alimentación.

Esto es darle más acceso a la justicia a la víctima para llegar al fin del proceso que es el esclarecimiento de los hechos. Existen buenas intenciones en la Ley para proteger a la mujer, sin embargo estará por verse si se cumple porque es cuestión de voluntad política y poseer los recursos para que se garantice.

La violencia física se contempla para los hombres (marido, ex marido, novio, ex novio etc.) pero no se habla de la violencia que ejercen las mujeres para algunos hombres, ni tampoco la violencia psicológica que ejercen hombres y mujeres con cargos públicos (jueces (a), secretarios (a), policías etc.), que humillan mujeres principalmente a las que carecen de recursos económicos.

No se toma en cuenta en la Ley estos casos. Si se establece la violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, pero no se habla de la humillación que reciben.

Se debe de complementar e incluir en la Ley, en uno de sus acápites, a las mujeres que cometen que agreden a otras mujeres y castigar a quienes asesinan a las mismas mujeres, la cual no establece.

Desde nuestro enfoque particular, técnico procesal, se debe de investigar a profundidad y objetividad a las mujeres que de una o de otra manera denuncian en base a sus conveniencias en contra de los hombres.

Además la norma prohíbe al hombre retirar enseres domésticos o menajes de casa, una violación a los derechos de los hombres en cuanto es visto desde la denuncia como acusado, sin velar su principio de inocencia, prohibirle al agresor en cualquier lugar ya no solo en la casa de habitación, lugar de trabajo, estudio, esto es sin lugar a duda un derecho a libre movilización y derechos individuales porque irónicamente se pueden encontrar en un estadio o procesión etc.

Con respecto a la violencia económica, este delito constituye una de los factores que más se dan en muchos hogares, por lo tanto se necesitara más cárceles para guardar a los hombres, no es correcto que obliguen al hombre a mantener a una

mujer que está apta para trabajar y que se hace la dependiente del hombre, aduciendo violencia y no es más que un modos vivendis, es arbitrario.

La Ley en su arto 4 plantea quince principios que de ser efectivos ayudaría a disminuir la violencia contra la mujer, pero reiteramos: se necesita voluntad política, se necesita de recursos, mayor presupuesto para las distintas instituciones (juzgados, policía, fiscalía etc.), para que no utilicen como excusa la falta de recursos materiales y humanos para poder cumplir con sus obligaciones.

Además de aumentar recursos, se necesita del cambio de mentalidad de funcionarios (policías, jueces, fiscales, diputados, funcionarios del estado etc.) que no obstaculicen la aplicación de la justicia que no estén por encima de la Ley y que no permitan que otros delincuentes de saco y corbatas, políticos, altos funcionarios, deportistas destacados pero delincuentes al fin y se sitúen o los sitúen por encima de la Ley, como ha ocurrido con frecuencia en Nicaragua en donde boxeadores, peloteros, políticos han violado mujeres y no son procesados.

Es necesario, un cambio en la mentalidad de todos los ciudadanos, cambio en la cultura del Nicaragüense y se debe educar a todos y a todos en especial a los niños porque son ellos los futuros funcionarios, deportistas etc., de este país para tener y mantener un país sin violencia extrema contra las mujeres.

En resumen está bien que se busque terminar con la violencia contra las mujeres, pero no reprimiendo a los hombres sin tener una clara certeza de que exista violencia por parte del acusado.

Así como está planteada la normativa sobre pasa el objeto y ámbito de aplicación, de la misma ya que debe de ser discutida con mayor profundidad para que sea una Ley que resuelva en gran parte el problema de violencia contra la mujer, pero que no venga a crear otros problemas por la excesiva carga de odio hacia los hombres y el explícito o implícito deseo de someter al hombre y no con el fin de terminar con la violencia hacia las mujeres y que se haga justicia.

Aunque la Ley está aprobada, hay que hacerle reformas para que no se invierta el papel y sean los hombres los que sufran violencia, y se imponga un entendido matriarcado, lo que generara más violencia.

3.- Instrumentos Regionales.

3.1- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujer “Convención de Belem do Para”.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, en junio de 1994, esta convención, que es el primer instrumento legal internacional en el mundo que reconoce, por un lado, el Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y, por otro, la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos.

Además, es un instrumento muy poderoso porque contiene mecanismos de protección a los Derechos que allí se contempla. Esto significa que existe así una mayor posibilidad de velar por el cumplimiento de las medidas que todos los Estados firmantes deben tomar, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el proceso de su aprobación fue determinante el papel de las mujeres víctimas de la violencia. Ellas tuvieron la valentía de romper con el silencio y de aportar testimonios que señalaron la necesidad de aprobar la convención. También fue importantísima la labor de los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe, que hicieron aportes verdaderamente valiosos en todo ese proceso.

Lo primero que queremos decir acerca de ésta convención, se refiere a la siguiente definición de violencia contra las mujeres: debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como el privado.

Esta definición es ampliada por la misma convención al señalar que la violencia de género incluye: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. La ventaja de esta definición tan amplia es que contempla muchas formas de violencia, pero además, establece que la violencia podrá darse tanto en el ámbito privado como en el público, y podrá ser ejercida por distintas personas o instancias, incluyendo a las instancias gubernamentales y sus agentes.

Esta definición hace posibles que ciertos actos, que hasta ahora no habían sido considerados como violentos, comiencen a ser parte de la violencia de género; por ejemplo, el mal trato que se les da a las mujeres en los hospitales cuando son atendidas en el parto.

También se consideran violentos aquellos actos que impiden nuestro acceso a puestos de decisión o los que refuerzan que las mujeres son las únicas responsables de la crianza y el cuidado de los hijos e hijas.

Detallamos, cuáles son los derechos que protege éste instrumento normativo a partir de dos afirmaciones centrales:

La primera, que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y, por lo tanto, tienen derecho a: vivir libres de toda discriminación y a ser valoradas y educadas sin caer en prácticas sociales y culturales que se basan en conceptos de inferioridad o subordinación, y.

La segunda, que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de sus derechos a: que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; a no ser sometidas a torturas, a que se respete su dignidad y se proteja a su familia, igualdad ante la Ley; y las acciones rápidas ante los tribunales que nos protejan de aquellos actos que violen sus derechos.

Para que lo establecido en la convención se cumpla, es preciso que los Estados adopten medidas como las siguientes:

Políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, entre las cuales se encuentran;

- No realizar actos de violencia y velar para que tampoco los realicen las autoridades, sus funcionarios y otros agentes, cambiar las leyes y prácticas que no han permitido sancionar la violencia contra las mujeres.
- Aprobar la legislación Penal, Civil y Administrativa que sea necesaria.

- Investigar, procesar y castigar a los responsables de los actos de agresiones, actos de hostigamiento y amenazas de los violadores y velar para que las mujeres tengan acceso debido a los procedimientos y la posibilidad de compensación por el daño que se haya ocasionado.

En lo particular en Nicaragua la Convención Belem Do Pará, fue Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Pará, Brasil, es un instrumento internacional y regional a favor de la mujer y que el mismo constituye el notable instrumento diseñado para erradicar la violencia contra la mujer. Entró en vigencia el 5 de marzo de 1995 de conformidad al artículo 21 de la convención.

Dicha Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará”, además de lo referido anteriormente refiere en su preámbulo que la violencia en que viven muchas mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Dicho instrumento además consagra el derecho y respeto que toda mujer tiene en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y en la Declaración Universal de los derechos humanos y ratificados en otros instrumentos Internacionales y regionales.

Misma, que los Estados están en deber de condenar, cualquier acción o violencia hacia las mujeres y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa, para evadir su obligación de procurar eliminarla de manera categórica.

Aunando a lo anteriormente señalado La “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención Belem do Pará” creó el mecanismo de seguimiento de la convención de Belem do Para (MESECVI).

Ante esta comisión, los Estados o Estado deben presentar informes Nacionales que incluyen información sobre las medidas legales administrativas que han tomado para cumplir con lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como también deberán referirse a las dificultades que han encontrado para su aplicación.

Esta Convención establece no solo mecanismo de protección, sino también de denuncia, por lo que si los Estados no adoptan las medidas comprendidas en ésta Convención, cualquier persona o grupo de personas, u organizaciones no gubernamental, podrá presentar denuncias o quejas de violación a la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Esto quiere decir que a una mujer u organización de mujeres puede presentar denuncias o quejas y, de ésta manera, exigir que el país cumpla con lo establecido en la convención.

Este mecanismo es muy importante porque no todas las convenciones lo contemplan, pues es una herramienta que podemos utilizar para asegurarnos de que el compromiso de los Gobiernos se cumpla y de que las mujeres puedan darle seguimiento. En octubre del año 2004 se aprobó el Estatuto del mecanismo de seguimiento de la Convención Belem Do Pará, con el fin:

- Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los países que han suscrito la convención y analizar la forma en que están siendo implementados.
- Promover la implementación de la convención y contribuir al logro de los propósitos establecido en ella.
- Establecer un sistema de cooperación técnica entre los países que han suscrito la Convención, el cual estará abierto a otros países miembros y observadores permanentes, para el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas como medio de actualizar y.
- Armonizar sus legislaciones internas, cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes vinculados a la Convención.

En lo general ésta Convención es un instrumento importante que las mujeres deben de utilizar para defender sus derechos y exigir a los Estados que cumplan con el compromiso que asumieron cuando la ratificaron.

Además, es un mecanismo para el fortalecimiento de las leyes de cada país, para aprovecharla es necesario idear una serie de estrategias que nos permita por un lado, apropiarnos de esta convención, y, por otro, vigilar su aplicación, una estrategia es una especie de plan para lograr un propósito, es decir que dichas estrategias se pueden aplicar en todos los Estados y, otras deben ser más específicas, y tienen que ver con la situación de un país en particular.

Dentro de las mecanismos interamericanos de protección y que los estados están en el deber de cumplir son los siguientes.

- Adoptar medidas de protección para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres en sus informes
- Proporcionar la asistencia a la misma, es decir contrarrestar aquellos grados de dificultades en la aplicación de la misma y identificar los elementos que contribuyen a la violencia contra las mujeres.
- Incluir a sus ordenamientos internos mecanismos de tipos legislativos, es decir modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes que permitan tolerar la violencia contra las mujeres, y tipo judicial y Administrativo es decir, juicios oportunos sin dilaciones, apegados a los procedimientos que conlleve, resarcimientos y reparación de daños u otros medios de compensaciones justos y eficaces.

3.2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El Estado de Nicaragua a pesar de haber firmado y ratificado sin reservas la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Julio de 1981 y octubre de 1981 respectivamente, continua sin firmar, ni ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW a pesar de las recurrentes demandas presentadas por los movimientos de mujeres.

Se desconoce que el Estado de Nicaragua realice un examen amplio en la legislación,, para detectar y eliminar leyes discriminatorias hacia las mujeres, aunque existe la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres recientemente aprobada a como está el sistema judicial, dudamos de su correcta aplicación.

Porque, no basta tener una herramienta jurídica complementaria que de tratamiento a la violencia y al Femicidio sino que la misma sea aplicada sin sesgos políticos ni revanchismo, sino que se requiere de un tratamiento especial de parte del Estado de Nicaragua a través de los operadores de Justicia.

Al hablar de la CEDAW debemos de analizar de manera breve dicha convención la cual define el término de discriminación contra la mujer en sus aspecto más integral, consagra principios, deberes derechos de los Estados partes, con carácter positivo de igualdad de derechos de hombres y mujeres a través de medidas legislativas proteccionista, en cuantos a la no discriminación de las mujeres e incluso a los compromisos en materia de Derechos Civiles y Políticos.

De los 30 artículos que posee la convención su espíritu legal definen las políticas que están encaminadas en la no discriminación contra la mujer, abordan, principios, mecanismos de protección en cuanto a modificar los patrones socio - culturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar perjuicios y prácticas consuetudinarias de inferioridad u superioridad de hombres y mujeres, educación, empleo, salario, trata de Personas, prostitución, así como participación efectiva de representación a nivel Nacional o Internacional en igualdad de condiciones

La misma Convención obliga a los Estados partes a honrar compromisos en cuanto a crear medios, mecanismos, legislativos, administrativo, judiciales u otras políticas las cuales no produzcan discriminación contra la mujer, es decir mejorar las condiciones entre poderes del Estado para la efectiva aplicación de la Convención, articulando dicho compromisos en el conjunto de políticas, programas y planes sectoriales a fin de disminuir la discriminación de la mujer promoviendo la igualdad de condiciones de hombres y mujeres

La “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), define en su artículo 1;

La Expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos de humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

El comité que habla el artículo 17 de dicha convención, en sesión ordinaria, estableció en recomendaciones generales número 19, que el concepto de discriminación contra la mujer, previsto en el artículo arriba mencionado, incluye la violencia basado en el sexo.

Elemento importante de este instrumento jurídico regional es la obligación de los Estados condenar la discriminación en todas sus formas contra las mujeres garantizándoles un juicio justo y oportuno sin dilaciones a fin de garantizarles una política orientada a eliminar la discriminación de las mismas, y cuyo objetivo es dar seguimiento a su compromiso de guarda y efectiva tutela a los derechos jurídicos de las mujeres sobre la base de la igualdad y adoptar las medidas de tipo legislativo para modificar o derogar leyes o reglamentos, usos y prácticas que constituyen una discriminación hacia la mujer.

Asumiendo una política a favor de las mujeres en el ámbito Nacional y que complementan lo antes referido es el hecho, que la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, incluye los diferentes tipos de violencia que antes de

su aprobación no estaban establecidas como tal, los cuales eran considerados como discriminatorios.

Lo que si podemos decir que la Ley así como está estructurada, es una norma muy adecuada a la circunstancias de violencias no obstante, en la misma se deben de analizarse sus aspectos financieros, humanos que ayuden a contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar y el Femicidio, porque el problema de violencia y Femicidios hacia las mujeres, es un problema que tiene que ver con la cultura patriarcal, machismo, desigualdades entre hombre y mujeres inculcados desde la infancia.

A raíz de las deficiencias arriba señaladas el CEDAW realizo algunas recomendaciones dirigidas a todos los Estados que han ratificado la Convención con el fin de indicarles cuales medidas pueden tomar para cumplir con lo que se ha establecido.

Su importancia ha ido creciendo porque amplían el alcance y el contenido de los artículos de la CEDAW hasta el punto de incluir nuevos temas. Por esta razón es importante hacer una referencia a algunas recomendaciones.

Una de las recomendaciones y observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación en contra de la mujer realizado en el 37° periodo de sesiones 1, 5 de enero a 2 de febrero del año 2007 y que señala de positivos y acoge con beneplácito al Estado de Nicaragua es la colaboración del gobierno y la sociedad civil en cuestiones de mujer.

No obstante entre sus principales esferas de preocupación y recomendaciones del comité en materia de Violencia hacia las mujeres, aunque reconoce que Nicaragua ha adoptado medidas para combatir la violencia contra la mujer y la niñez y mejoras en el sistema de Justicia, el comité, observa con preocupación, la prevalencia de todas las formas de violencia que sufre la mujer y niñez y la falta de concientización social y de condena a este tipo de violencia en el país, y que no se cumple la Ley, ni se enjuicia o castiga a los agresores y que las mujeres no tienen acceso a la justicia en los casos de violencia especialmente las mujeres y las

niñas en las zonas más pobres y rurales, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana.

Así mismo la falta de datos del estado de las mujeres y la falta de medios para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Otras de las esferas de preocupación del comité y que el Estado debe de realizar, es prestar atención prioritaria y adoptar una estrategia amplia e integrada para hacer frente a la violencia que sufren las mujeres y la niñez, teniendo en cuenta la recomendación general 19, relativo a la violencia contra las mujer.

Y, al mismo tiempo adoptar medidas concretas de prevención, efectivas que aplique y haga cumplir plena y sistemáticamente las leyes relativas a la violencia contra la mujer y que se enjuicie de manera efectiva a los agresores y se castigue debidamente.

Ante los planteamientos y esferas de preocupación por parte del Comité de la (CEDAW), Nicaragua, presentó un informe o Documentos básico común que forma parte integrante de los informes específicos de Nicaragua en el año 2010, declaró que en base a iniciativas de Organizaciones de mujeres a través de articulaciones sectoriales e interinstitucional, ha realizado trabajos para identificar y asumir que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos que impacta negativamente la calidad de vida de las personas, especialmente de las mujeres.

Además, asume que la violencia contra las mujeres es un problema de primer orden para la salud pública y la seguridad ciudadana y que sus hechos constituyen delitos penados por la Ley.

Igualmente en su informe, describió que existe una articulación a través de la Comisión Nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia cuya secretaria ejecutiva está a cargo del INIM y que ha continuado, con sus tareas de coordinación entre las instituciones del Gobierno y la sociedad civil, con el fin de unir esfuerzos para dar respuesta en materia de Violencia

Intrafamiliar, lo cual está integrada por funcionarios/as de alto nivel que representan a 18 instituciones de gobierno y 4 de la sociedad civil,

Además, el Estado implementó el Plan Nacional de la Violencia y el programa nacional de Violencia basada en género, liderado por la Comisión Nacional de lucha contra la violencia hacia la Mujer niñez y adolescencia, mediante acuerdo ministerial el Ministerio Público creó la Primera Unidad especializada de delitos de violencia intrafamiliar.

Asimismo la Policía Nacional creó, las comisarías de las mujeres, para dar seguimiento y atender los casos de violencia Intrafamiliar y sexual, existiendo en la actualidad 27 comisarías a nivel nacional, mismas que han contribuido a una mayor posicionamiento de la problemática de la violencia intrafamiliar en la agenda social y política.

Entre los avances positivos del Estado de Nicaragua en materia de violencia intrafamiliar, es la creación de Comisarias de la mujer, niñez y adolescencia para la atención de víctimas de VIF, por ende, esto significa un avance significativo aun cuando se necesita apropiarse de personal humano altamente calificado y, de herramientas especializadas para el tratamiento del delito.

También otro aspecto positivo es la Unidad especializada de violencia de género del Ministerio Público, que en la actualidad, requiere de personal altamente especializado en materia de violencia lo cual no existe, solamente existe un instructivo para el tratamiento de VIF utilizados por los fiscales.

Un avance en cuanto a la recomendación de la Cedaw, por parte de Nicaragua es la Aprobación de la Ley integral de Violencia hacia las mujeres, ya que con esta Ley, Nicaragua asume el compromiso a nivel internacional de incorporar a su normativa interna una Ley, que permitirá darle tratamiento a los delitos de Violencia contra las mujeres de manera integral, al mismo tiempo tipificar el delito de Femicidio.

Si bien es cierto Nicaragua presentó estos informes en la que se nota que ha avanzado significativamente en materia de violencia intrafamiliar, el Estado debió

de haber presentado cifras, estadísticas e informes de Organizaciones que tutelan los derechos de las mujeres, porque hay que tomar en cuenta las estadísticas de las organizaciones de mujeres para realizar una relación de cifras y estadísticas que nos permitan observar datos concretos en temas de VIF y no obstruir, ocultar e invisibilizar el problema de la violencia hacia las mujeres que en Nicaragua es grave.

Al mismo tiempo el Estado de Nicaragua debe de accionar y ser más beligerantes en cuanto a la violencia Intrafamiliar, es decir un mayor posicionamiento y coordinación con las distintas organizaciones de mujeres, ya que en la actualidad existe una gran centralización de información y ocultamiento de cifras por parte del Estado y de sus instituciones.

Aunque existen importantes avances en la materia, el problema de la violencia Intrafamiliar y sexual continua siendo un problema de especial preocupación para Nicaragua.

En Nicaragua nos encontramos ante un Sistema Judicial, Ineficiente, corrupto y Discriminatorio. según la la (Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), 2011), *cerró con 76 Mujeres Asesinadas en el año 2011*, de las cuales se encuentran 24 asesinos prófugos de la Justicia, 27 que están siendo Juzgados, Femicidios sin respuesta 4, asesino que se suicidó 4 y 1 asesino fue ultimado por el esposo de la víctima, 6 condenados de 1 a 24 años de prisión, 1 se quitó la vida después de haber discutido con su pareja, tenía tres meses de gestación 1 se quitó la vida de no aguantar el maltrato que recibía de su esposo y por ultimo 3 asesinatos no esclarecidos.

Mismos datos coinciden con el monitoreo de los medios de comunicación que registra 76 muertes de mujeres asesinadas, cifras que presentan una reducción de 13 menos comparados con el año 2010 que cerró con 89 crímenes contra la mujer y que de acuerdo a esta organización existe poca poca información y procesamiento de la misma para el acceso de la justicia.

En un informe preliminar de acceso a la Justicia en Nicaragua, se descubrió que la ineficacia de los operadores de Justicia, el ocultamiento de información, el

desinterés por la verdad, la falta de Investigación, la tolerancia y la permisividad hacia los crímenes de mujeres, forman parte de la cadena de la impunidad ... (Misión Internacional de Acceso a la Justicia, 2010).

Lo que significa que la impunidad que imperan estos crímenes, es el mensaje que el estado está enviando socialmente, al desvincularse de la responsabilidad de proveer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas.

El Estado de Nicaragua tiene por mandato constitucional cumplir y hacer cumplir los Derechos de todas las personas sin distinción sexo, edad, raza, clase social, preferencia sexual, capacidades diferentes, religión, partido u otra condición que cause discriminación.

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de los derechos humanos y que son atribuidos, inherentes a la dignidad.

4.- Análisis Comparativo, Jurídico Centroamericano y regional referente al delito de Femicidio.

4.1 Derecho Comparado.

Al hablar de derecho comparado podemos decir que en nuestros países es muy incipientes jurídicamente la figura del femicidio como delito penal, aunque existe la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley No.641 Código Penal de Nicaragua, que en la actualidad, ya fue aprobada, no así falta el procedimiento, de publicación y vigencia, la cual lo incorpora, término que en la actualidad solo tres países de América Latina han incorporado en sus Códigos penales como lo son Costa Rica, Guatemala y Chile.

En un estudio realizado en Costa Rica sobre la Ley de Penalización de Violencia hacia la mujer la misma reconoció, la existencia del femicidio en aquellos casos en los que la violencia fue perpetrado por esposos y compañeros en unión de hechos, sin embargo no incluye a ex parejas ni a otros hombres que mantengan un vínculo familiar con las víctimas... (Almachiara D'Angelo 2010.)

Álvarez & Almachiara D'Ángelo (2010) cito que la Republica de Chile el 21 de diciembre del año 2009, aprobó por unanimidad, el proyecto de que consagra penalmente el femicidio para el caso que una mujer sea asesinada por su marido o conviviente.(P. 30).

De acuerdo al Movimiento de Mujeres Trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra (2010).

El estudio de leyes existentes en Centroamérica señala que a mediados de la década de los años noventa, se promulgaron leyes de protección o sanción de la violencia intrafamiliar o doméstica, una vez que la mayoría de los estados ratificaron la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Un segundo momento de reforma se produce a mediados de la década del 2000, en respuesta al aumento de la violencia y la impunidad en que se dejan estos delitos. Otro rasgos que caracterizan son normas estándares que buscan una mayor protección para las mujeres, así como el abordaje de medidas integrales para prevenir, atender y proteger a las mujeres que sufren violencia.

De acuerdo al Movimiento María Elena Cuadra (MEC, 2010), las *leyes contra la Violencia contra la violencia doméstica o intrafamiliar* podrían ser clasificados en dos modelos: el primero se refiere a un conjunto de normas que forman leyes de naturaleza mixta (Costa Rica, Honduras y Guatemala); al segundo responde a reformas parciales del derecho penal, tal es el caso de Nicaragua y Panamá.

En cuanto al primer modelo (Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica) la naturaleza de estas leyes es de carácter precautorio, no son procesos residuales o sustitutos de otros procesos, sino que son independiente; el objeto de la ley va dirigida a Prevenir y sancionar la violencia o la repetición de la violencia, se crea un proceso sumario para el Derecho de familia.

Así mismo se crearon Juzgados Especializados en Violencia Domestica, los Juzgados de Familia y los Juzgados contravenciones, los cuales actúan con procedimientos y tramite expedito, simple y célere y están facultados para aplicar el impulso procesal de oficio. Se busca que la vía judicial sea expedita, para otorgar las medidas de protección, sin que tener que recurrir a la denuncia penal o la demanda de familia.

Un aspecto a subrayar es que esta legislación no resuelve el problema de fondo, pues difícilmente logra romper con el círculo de la violencia, su finalidad es la protección de la vida, la integridad física emocional, sexual y patrimonial, todo esto en concordancia con lo establecido con la convención de Belem Do Pará.

Al analizar el derecho comparado de algunas legislaciones en sus ordenamiento particulares jurídicos, podemos decir que existe una analogía en común esto producto del grado de responsabilidad, compromisos, requerimientos y estándares establecidos en dos instrumentos Regionales e internacionales que los estados partes materializan en su ordenamiento penal, como son,, La “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujer “convención de Belem do Para” y que los Estados partes han tomado con responsabilidad dichos compromisos con su debida ratificación.

Si retomamos el factor de la mala praxis Penal en los sistemas jurisdiccionales de los países, se denota la tendencia de no fijar estas medidas desde una óptica integral legal que permita restaurar la seguridad jurídica, para que las víctimas puedan romper el ciclo de la violencia.

Podemos afirmar que las medidas de protección, seguridad y cautelares que establecen las leyes, aunque en los instrumentos relativos antes descritos explícitamente a si lo establecen, muchos Estados frecuentemente incumplen, ya que el agresor, en muchas ocasiones por formalismo procesales son encontrados no culpables y en la mayoría de los casos son beneficiados por el principio de oportunidad o mediación lo que genera la impunidad

De acuerdo al segundo modelo referido por el (Movimiento María Elena Cuadra (MEC, 2010).

El segundo modelo se ubica a Nicaragua y Panamá, en ambos países se produjeron reformas parciales del derecho Penal que incluyen la violencia doméstica o intrafamiliar, en cuanto al proceso, las normas de violencia doméstica que son del ámbito penal, presentan algunas dificultades que promueven la impunidad.

En nuestro ordenamiento Penal nicaragüense, los procesos penales están impregnados de simbolismos y garantías que en algunas ocasiones se revierten en contra de las víctimas de la violencia doméstica, donde la evacuación de las pruebas va dirigida a garantizar más los derechos del imputado que los de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Razón de estos es que en la realidad, muchos de nuestros judiciales aparentemente tienen un desconocimiento en cuanto a la aplicación de las normas, no a si a interpretaciones políticas cuando favorecen a personas ligadas a un poder político.

Concluimos que el Derecho Penal parte de un desequilibrio de las relaciones de poder entre el Estado y la persona procesada, que no contempla la situación de la víctima.

En el caso de la violencia doméstica, la víctima o víctimas se encuentra en clara desventaja frente a su agresor, pero en el proceso penal esta desigualdad no es tomada en cuenta por el sistema, es decir en el derecho Penal únicamente los hechos y preceptos legales se consideran relevantes para determinar el hecho, no toma en cuenta las emociones, los temores y las relaciones de poder implícitas en la violencia hacia la mujer.

4.2 Costa Rica.

En el año 2007 Costa Rica aprobó la “Ley No. 8589 de Penalización de Violencia Contra las Mujeres. (Gaceta103, 2008). En cuanto al delito de femicidio la Ley, lo contempla en título II CAPITULO I el artículo 21.

El cual establece se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho declarada o no años

Si bien es cierto dicha Ley reconoce la existencia del Femicidio en aquellos casos en los que la violencia fue perpetrada por esposos y compañeros en unión de hecho, sin embargo no incluye a ex parejas ni a otros hombres que mantengan un vínculo familiar con las víctimas.

Así mismo Ley arriba mencionada, regula la conducta de violencia Intrafamiliar la cual contiene dentro de sus títulos y capítulos las siguientes disposiciones generales, penas, definiciones, violencia psicológica, violencia sexual, violencia intrafamiliar, incumplimiento de deberes, incumplimiento de una medida de protección y disposiciones finales.

Del análisis con respecto al contenido general antes mencionado, podemos definir el efecto mencionado el cual se desprende que la materia que la materia penal en su legislación es abordada en los diferentes aspectos, dándole un grado de connotación al delito autónomo con sus propias especificaciones, es decir que los delitos aunque los recoge en una Ley autónoma, son contemplados explícitamente para su debido tratamiento especial.

En cuanto a las circunstancias agravantes generales del delito según el artículo 8 de la Ley.

Serán circunstancias agravantes generales de las conductas punibles descritas en esta Ley, con excepción del Femicidio, y siempre que no sean constitutivas del tipo para perpetrar el hecho: Contra una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente. Así contra una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad. Además contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posterior al parto.

En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del autor del delito con el concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o mediante el uso de armas al igual que exista alevosía o ensañamiento, y, por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier naturaleza o el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o tecnológico del autor en la comisión del delito y uso de animales.

Cuando el juez imponga la pena aumentara hasta en un tercio la señalada por el delito correspondiente, cuando concurren una o varias circunstancias agravantes.

Otro de los aspectos importantes, de conformidad al artículo 25 referido al a violencia emocional el cual establece que la misma Violencia emocional: Será sancionado con pena de prisión de seis a dos años, la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, esta puede considerarse como violencia psicológica como lo establece la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres de Nicaragua.

Es el hecho que por sentencia de la sala constitucional No. 15447 del 15 de octubre de 2008 fue anulado y se adicionada mediante resolución de la de la sala constitucional No.7398 del 6 de mayo del 2009.

Con la “Ley No. 8589 de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, (Gaceta 103 2008), Costa Rica incluye, entonces, los crímenes cometidos tanto en el

ámbito público como el privado, tal como lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer convención Belem do Pará.

Así mismo Costa Rica hace una utilización restringida del Femicidio, ya que lo relaciona única y exclusivamente el asesinato cumplido por el marido o esposo o convivientes y nos mas allá de las relaciones que pudiese haber o tenido con otras personas.

Al hacer un análisis exhaustivo, el artículo 21 de la referida Ley, la misma no considera Femicidio como tipo penal sino homicidio al hombre que comete un delito contra su ex mujer, pues el tipo Penal exige que el vínculo matrimonial esté vigente.

El mismo articulado no penaliza otros homicidios que se producen en el ámbito de las relaciones de pareja o ex pareja.

Por otro lado, el artículo 111 de la Ley sanciona el homicidio simple con pena de prisión de doce a Dieciocho años, el homicidio calificado, de acuerdo con el artículo 112°, está sancionado con pena de veinte a treinta y cinco años, a quien mate:

4) Con alevosía o ensañamiento.

5) Por medio de veneno administrado insidiosamente.

8) Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados

o procurar, para sí o para otro, la impunidad o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

En informe de la (Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010) afirmó los femicidios se redujeron considerablemente aportando un nuevo escenario de prueba para la institucionalidad de Costa Rica en defensa de los Derechos humanos de las mujeres, tal es el caso que de acuerdo Carcedo (2010), con la aprobación de la

Ley de Penalización de violencia hacia las mujeres, la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica que incorporó “en su ámbito restringido a matrimonio y unión de hecho estable, ésta enmienda tuvo un impacto inmediato, los cuales los Femicidios se frenaron casi totalmente.

Carcedo citada por la (Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010) en Costa Rica hubo un retroceso en las políticas públicas, y es el hecho que el año 2008, la Sala Constitucional anuló dos artículos de la Ley de Penalización, además, retrocesos en los programas policiales, las mujeres víctimas de violencia muere aun con medidas de protección, no se reciben denuncias penales por incumplimiento de Medidas de Protección... así mismo retrocesos en los programas y espacios especializados, y finalmente existe un debilitamiento de INAMU. Ministra fundamentalista atacan en 2005-2006 trabajos en VCM, porque no se trabaja con los hombres.

Lo que se puede evidenciar es que la violencia de la mujer en Costa Rica, con estos elementos, genera impunidad porque penaliza la violencia como tal contra la mujer es decir en el seno de acción privada que se conoce la Violencia Intrafamiliar, en pocas palabras no penaliza las diferentes manifestaciones previas de violencia contra la mujer e incapacidad en la investigación.

4.3 Guatemala.

La Constitución Política de la República de Guatemala contempla en sus cuatro primeros artículos la protección de la persona, los deberes del Estado, el derecho a la vida, la libertad e igualdad; en cada uno de ellos, el Estado guatemalteco reconoce su obligación de proteger a cada persona, así como su deber de garantizar los derechos básicos de todas y cada una de las que viven en su territorio.

De igual manera el “Código Penal Guatemalteco”, en el apartado que se refiere a los delitos contra la vida e integridad de las personas (Libro Segundo, Título I, Parte Especial), entre los asesinatos calificados establece la figura delictiva del asesinato (Art. 132).

Y que para que exista el delito de asesinato deben concurrir: la alevosía, el ensañamiento (mutilación, tortura, violación), la premeditación conocida, como el impulso de perversidad brutal (cerceamiento del cuerpo antes y/o después de asesinada la víctima), la preparación, facilitación, consumación y ocultamiento, para asegurar sus resultados o la inmunidad para el autor y los copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible (ocultamiento de violación, ocultamiento de información conocida por la víctima).

A razón de estos artículos arriba señalados el Congreso de la República de Guatemala elevó a la categoría de Ley vigente el Femicidio y el Acoso sexual. En una ley específica en Decreto (22-2008), denominada, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y acoso sexual, y, que el Estado Guatemalteco asume sus compromisos de sancionar, erradicar, y castigar a quienes cometan éstos delitos, complementados en materia de Derechos Humanos a favor de las mujeres como; son; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), así como de la convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belem do para”, el cual es parte Guatemala

Al analizar esta Ley se puede destacar lo siguiente, y es que en la misma se crea dos tipos penales como el Femicidio y acoso sexual además crea figuras delictivas así se crea la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer (CONAPREVI), cuyo objeto es dar acompañamiento, asesoría y monitoreo a las organizaciones de mujeres, especializadas, que los administren.

Además es el ente asesor de políticas relativas a reducir la violencia en todas sus manifestaciones contra la mujer, asesoramientos, seguimientos y monitoreo de procesos de formación etc., y con aptitud étnica cultural dirigidos a funcionarios y públicos, con especial énfasis a los operadores de justicia.

De acuerdo al Decreto (22-2008) artículo 6, capítulo IV acápite referidos a delitos y penas. *Femicidio*.

Lo comete quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;
- b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral;
- c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;
- d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo; e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación; f) Por misoginia;
- g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
- h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el Artículo 132 del Código Penal; que establece “La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.-

La misma Ley prohíbe la aplicación de eximentes y atenuantes en los delitos tipificados contra la mujer o de cualquier circunstancias que logren excusar la conducta delictuosa, así mismo la normativa establece que no podrá invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.

Es decir con sola denuncia del hecho delictivo en el ámbito privado el órgano jurisdiccional que lo conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el Artículo 7 de la Ley, aun cuando el agresor no sea su pariente.

De acuerdo a la “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” (Decreto 22-2008), artículo 10 señala las circunstancias agravantes de

acuerdo a lo siguiente a) En relación a las circunstancias personales de la persona que agrede; b) En relación a las circunstancias personales de la víctima) En relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede; d) En relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y al daño producido.

Pero la Ley no hace referencia el grado de gravedad que puede ser aplicado, por lo que deberá tomarse en cuenta al respecto en lo establecido en el Código Penal con respecto a las circunstancias agravantes encontradas en la conducta delictiva

La (Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010) en el primer encuentro de mujeres de Mesoamérica y el caribe, afirmó que en Guatemala se registran, entre 2000 y 2010, un total de 5171 casos de muertes de mujeres entre los cuales se reportan más de una forma de eliminación de la víctima, siendo el 71% armas de fuego.

En el 68% de los asesinatos, las víctimas tenían de 11 a 40 años y en el 61% no se pudo investigar el móvil. El 3,82% son clasificados por la policía como crímenes pasionales, lo que demuestra la culpabilizarían de la víctima y el desprecio al procedimiento forense y de investigación policial., en un 64% no se sabe la relación de la víctima con el femicida, y se reporta que un 33,28% de muertes violentas sucedió en el contexto de violencia Intrafamiliar, el mayor porcentaje de los Femicidios ocurrió en el Departamento de Guatemala y sus municipios.

El mismo organismo concluyó que en Guatemala hay un registro de investigación criminal deficiente y descoordinado, existe una falta de recursos, poco conocimiento sobre violencia contra las mujeres por parte de los operadores de justicia, ejemplo de lo antes relacionado, en Guatemala existe una buena cantidad de investigaciones que señalan que las personas operarias de Justicia no tienen claridad de cómo aplicar o involucrarse en lo que manda la Ley del Femicidio y otras formas de violencia.

De lo anterior la (Relatoría sobre los derecho de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2004), sostuvo que la situación de los asesinatos y asesinatos de mujeres en Guatemala refleja un aumento no sólo

en términos numéricos, sino un agravamiento en el grado de violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas mujeres víctimas.

La notoria percepción de inseguridad que experimentan hoy día las mujeres en Guatemala, a propósito de estos hechos, indica un efecto intimidatorio que puede llevar “a enviar un mensaje perverso: que las mujeres deben abandonar el espacio público que han ganado con tanto esfuerzo personal y social y recluirse nuevamente en el mundo privado, abandonando su rol indispensable en el desarrollo nacional.

De lo anterior arriba descrito, analizamos que la normativa legal en Guatemala en el tema del Femicidio y violencia hacia la mujer, no es sólo su existencia como tipo Penal sino que esta Ley debe de innovar castigar, eliminar y sancionar con plenitud a quienes cometen crímenes contra las mujeres, pero esto debe de estar respaldado por el Estado, sociedad, instituciones del Estado, Ministerio Público y poder Judicial ya que de nada sirve tener una Ley que castigue si sólo se va a tener como papel blanco. Se trata de cumplirla y hacerla cumplir con rigurosidad y disminuir el alto grado de muerte de mujeres.

Esta incorpora la figura del Femicidio como tal y el acoso sexual en una Ley autónoma, y define directrices de conductas delictivas de manera integral que conlleva a castigar de manera rigurosa el delito de Femicidio y acoso sexual, puesto que estos dos tipos penales asegura según la Ley, como está planteada, el castigo jurisdiccional y un basta ya de muertes, asesinatos y homicidios de mujeres en Guatemala.

3.4 Panamá.

En la actualidad Panamá a través de la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de reforma al Código Penal para tipificar el Femicidio y sancionar la violencia contra las mujeres y así establecer el delito de Femicidio y otras formas de violencia hacia la mujer. En cuanto a sus disposiciones generales de la referida propuesta de Ley, define el Femicidio.

Femicidio: Es la acción de dar muerte a una mujer por su condición de tal valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de convivencia, de intimidad o noviazgo con la víctima;
- b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima, relaciones conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral;
- c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;
- d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo;
- e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación;
- f) Por misoginia.

2.- Maltrato físico: es todo tipo de lesión que se realiza contra el cuerpo de la mujer causándole dolor o daño, y/o cualquier otra forma de agresión que afecte su integridad física.

3.- Violencia económica:

Es aquella que, dentro del ámbito público o privado, se produce en perjuicio de una mujer con quien se mantuviera una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, de intimidad o noviazgo, incurriendo en alguna de las conductas comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales.
- b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que eximan al autor de este delito de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza;

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales;

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos; e) Ejercer violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar.

Dentro de las novedades que se encuentra en dicha norma jurídica es una nueva figura “Amicus Curiae” que dentro de los objetivos de esta figura procesal es asistir al tribunal, proporcionándole una opinión fundada o una información relevante sobre la cuestión jurídica, que pudiera escapar a la consideración de aquél y colaborar así para decidir con acierto un caso complejo.

De acuerdo al (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 2011). Indica:

En la práctica actual la figura del “Amicus Curiae” tiene un significado diferente al tradicional, ya que no trata de ilustrar al juez como un “amigo del Tribunal” sino de apoyar la causa de uno de los litigantes; por tanto, en el escrito donde se presenta se debe identificar a la parte que se apoyará en el juicio.

La intervención se traduce en la presentación de escritos ante los tribunales de primera o segunda instancia o ante los tribunales de máxima jerarquía judicial.

De acuerdo a la Constitución Política Panameña, los amigos del Tribunal, “Amicus Curiae”, encuentran su fundamento jurídico en el preámbulo de dicha carta magna, en especial en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 y en el artículo 37, mismos que vienen a promover la justicia social, la dignidad y el bienestar de los panameños.

Dentro de las circunstancias agravantes generales en cuanto a las conductas punibles que propone la Ley contra la violencia y otras formas de violencia de Panamá, en especial en el artículo 20 con excepción al Femicidio

A saber están, contra una mujer discapacitada, mayor de 65 años, embarazada o durante los tres meses posteriores al parto, en presencia de sus hijos o hijas menores, con el concurso de otras personas, alevosía o ensañamiento, por precio o ventaja, con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o tecnológico del autor en la comisión del delito, y contra pariente cercana.

Otros de los aspectos importantes de esta normativa es la creación de las fiscalías y órganos jurisdiccionales, a cargo del Ministerio Público, dichas dependencias están encargadas en los delitos contra la vida e integridad de las mujeres en cada provincia y con funcionamiento en régimen de veinticuatro horas, facultada y especializada en la investigación de los delitos creados por ésta Ley, con todos los recursos presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos que le permitan el cumplimiento de los fines de la misma.

Otras de las expresiones importante de esta Ley, es en cuanto al delito de acoso sexual, que en el caso del Código Penal Panameño según el (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 2011) refiere que en el caso del artículo 3 que contiene la Ley, a saber... acoso sexual...

Resulta necesaria, porque el acoso ha sido descrito en muy pocas leyes panameñas ya que el Código Penal Vigente solo lo menciona el arto 175, sin describir en que consiste “hostigar” y agrava la sanción para las victimas menores de dieciocho años. *Quien por motivaciones sexuales hostigue a una persona de uno u otro sexo será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana.*

Se agravará la pena de dos a cuatro años de prisión, en los siguientes casos:

1. Si la víctima no hubiera cumplido dieciocho años de edad.
2. Si el autor cometiera el hecho abusando de su posición

De manera general esta norma jurídica panameña, pretende frenar la violencia y femicidio en esta región ya que según, Un informe del (Observatorio Panameño

contra la violencia de Género, 2011), precisó que entre 2008 y 2010, unas 194 mujeres murieron de forma violenta en Panamá.

De ellas, 42 corresponden al 2008, otras 80 fueron registradas en 2009, y 72 en 2010. Y este año han sido asesinadas 17 mujeres. Además Panamá en la actualidad en su Código Penal y leyes no cuenta con herramientas jurídicas en lo que hace al Femicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres.

4.4 El Salvador.

En noviembre de 2010, fue aprobada en El Salvador, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres quien entrara en vigencia a partir del 1 de enero del año 2012 de conformidad al arto 61.

Dentro de los objetivos de esta normativa legal, establece, reconoce y garantiza los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detención, prevención, atención, protección, y sanción de la violencia contra las mujeres a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.

A sí mismo la Ley antes referida en particular el artículo 45º tipifica el delito de Femicidio en los siguientes términos:

Artículo 45º.- Femicidio

Quien le causare muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima;

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.

c) Que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género.

d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual.

f) Muerte precedida por causa de mutilación.

De acuerdo a los incisos c, d y f estos dos acápites, son dos piezas claves en cuanto a dos elementos misóginos, es decir de odio o menosprecio por la condición de mujer, y que la normativa así lo establece de manera amplia, la misma no establece con claridad la relación causa-efecto de las conductas que pueden agravar el Femicidio.

En cuanto al inciso d, el legislador/a bajo el espíritu de la Ley quizá señalar, por ejemplo, que la violación de *seguida de muerte se considerará Femicidio*, pero por la forma de redacción se deja un espacio amplio de libertad para que el/la juzgador/a interprete de acuerdo a su saber y entender.

Es de notar de importancia en esta Ley de conformidad al;

Artículo 9º.- Tipos de violencia

Para los efectos de la presente Ley, se consideran tipos de violencia:

(...)

b) Violencia Femicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por un conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en Femicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres

Y de lo que Villanueva (2011). Indica lo siguiente con respecto a los literales del artículo 9.

Al igual que en el caso guatemalteco, esta “sobre regulación” contenida en los artículos 45° y 46° de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres puede ocasionar problemas de concurso de leyes y de subsunción de hechos en los tipos penales, además de problemas de prueba.

Finalmente, si bien las definiciones de la Ley salvadoreña están mejor elaboradas que las de la Ley guatemalteca, la contenida en el artículo 9° b) también evidencia que las reflexiones del ámbito de las ciencias sociales han sido trasladadas al ámbito jurídico, ya no sólo sin ningún tamiz, sino, al parecer, sin un objetivo claro.(p.156)

A lo concerniente a otras formas de violencia contra la mujer, en el salvador según la alianza por la diversidad sexual, LGBT (2010) citada por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010p,163), en lo que hace a la incidencia política de la organización, *se logra mayor posicionamiento público a raíz de las pretendidas reformas constitucionales a los artículos 32,33 y 34, promovida por la red de la familia y la jerarquía de la iglesia católica, entre grupos conservadores y fundamentalistas, sin embargo la coyuntura genero amenaza, muerte, asesinatos y odio en los vecindarios, comunidades y familias, así como el surgimiento de un grupo de exterminio contra personas de la comunidad LGBT.*

Por primera vez en la historia del Salvador, las lesbianas y mujeres trángenero son parte de la vida del Movimiento popular, (concertación popular por el cambio) y del consejo económico y social, se estableció el 17 de mayo como el día Municipal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género (2007) y la Declaración sobre Derechos Humanos y diversidad sexual de la ciudad de San Salvador (2006).

Con respecto a las reformas constitucionales arriba descrita las mismas consistían en prohibir los matrimonios entre personas homosexuales, la prohibición de la adopción por parejas del mismo sexo y la introducción del término así nacido, como una condición indispensable para que hombres y

mujeres puedan contraer matrimonios, es decir, la reforma promovía el no reconocimiento de la identidad sexo- genérica de las mujeres transgénicas.

4.5 Honduras.

Es de notar importancia que en la legislación de honduras se cuenta con una ley denominada *“Ley contra la Violencia Doméstica (Decreto No. 250-2005) que entro en vigencia el 11 de marzo del 2006) y se adiciona las reformas al código penal de honduras*

A partir de estas reformas se introdujeron significativos avances en la Ley, entre ellos, la sanción del acto que motiva la denuncia de violencia doméstica, la introducción de mecanismos de coordinación y seguimiento, el aumento del período de imposición de las sanciones y otros más, cuya debida aplicación dependerá de la voluntad de las instituciones del Estado sobre las que se ha depositado la responsabilidad de contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el decreto No. 250-2005 (la gaceta no 30,950 del 11 de marzo del 2006 denominada “Ley contra la violencia doméstica” es una Ley de orden público, y tiene dentro de sus objetivos proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual, contra cualquier forma de violencia hacia la mujer, estos derechos antes señalados son considerados universales y la misma norma indica todo acto de discriminación y violencia contra la mujeres será sancionado de conformidad a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer y otras

Como habíamos mencionado anteriormente, una vez interpuesta la denuncia se dictarán medidas de seguridad, así mismo no se requerirá la representación de un profesional del derecho sino posterior al tratamiento procesal.

A fin de garantizar la gratuidad y celeridad para las víctimas de violencia las instituciones estatales, ministerio público y otras, deberán atender y suministrar a

las denunciantes los servicios legales oportunos, para lo cual todos los días y horas son hábiles..

A demás se dejan plenamente establecidas los tipos y formas de violencia en la Ley como son; *violencia doméstica*, ejercicio desigual de poder, violencia física: tipificada como delito en el Código Penal; violencia psicológica, sexual: y, patrimonial y/o económica:

Mismos, que deberán contar con mecanismos de protección para tutelar sus derechos las cuales consisten en medidas de protección que consisten en: medidas de seguridad, precautorias y cautelares, las cuales aseguren separación del hogar que comparte con el denunciante, darle seguridad, prohibición del denunciante acercársele a la víctima de violencia cerca de la casa, trabajo, casa de habitación, detención de por un término no mayor de veinticuatro (24) horas, al denunciado in fraganti; prohibir actos de intimidación o perturbación contra cualquier miembro de su familia.

Se observa que una vez el juez o jueza tenga conocimiento del caso podrá ordenar dicha medidas y se le encuentra armas las misma serán retenidas y remitidas al juzgado correspondiente, tomando en cuentas todas la medidas en contra de la personas que rodea al denunciado. Si se encontraron armas al denunciado estas serán también remitidas al almacén del ministerio público como evidencias si las mismas no fueron reclamadas.

En cuanto a las medidas Precautorias referidas en la Ley estas medidas están orientadas para a prevenir la reiteración de la violencia doméstica mediante la reeducación del denunciado y el fortalecimiento de la autoestima de la mujer y las cuales se disponen la obligatoriedad, disposición y sesiones al denunciado para dale cumplimiento a las medidas impuesta por el juzgado correspondiente.

De las medidas cautelares que habla la Ley, éstas pretenden dar cumplimiento a las responsabilidades familiares del denunciado y serán exclusivamente impuestas por el juzgado, pudiéndose dictar una o más de las siguientes: Fijar de oficio una pensión alimenticia provisional, cuya cuantía estará en correspondencia con las necesidades del alimentario o alimentaria, de conformidad al Código de Familia.

Estas pensiones deberán consignarse anticipadamente y se pagarán por cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales según convenga en el Juzgado que imponga la medida o en cualquier otro lugar siempre y cuando se garantice su cumplimiento.

De incumplir ésta obligación se procederá a requerir de pago dentro de las 24 horas. Además se establecerá la guarda y cuidado provisional de los hijos e hijas menores de edad a cargo de la afectada.

Estas medidas de protección son inapelables. Si en el caso que el denunciado cometa un delito dentro de las medidas de protección el mismo será sancionado a como lo dispone el Código Penal con la prestación de servicios a la comunidad por el término de uno (1) a tres (3) meses, cuando la denuncia sea declarada con lugar; y, con la prestación de servicios a la comunidad de uno (1) a tres (3) meses por el no acatamiento de uno o más de los mecanismos de protección impuestos, sin perjuicio de la pena a que hubiere lugar por el delito de desobediencia a la autoridad.

La prestación de servicios a la comunidad deberá consistir en una profesión, oficio o actividad laboral diferente a la que ordinariamente realiza el denunciado y equivaldrá a una jornada de dos (2) horas diarias, las que pueden ser en horas hábiles o inhábiles, sin embargo, podrán en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en horas inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita.

Para el cumplimiento de estas imposiciones, el juzgado remitirá a la Alcaldía correspondiente el listado de las personas sancionadas los primeros cinco (5) días de cada mes.

Asimismo la Alcaldía Municipal correspondiente deberá informar obligatoriamente sobre la asistencia y cumplimiento de la sanción impuesta al denunciado dentro del mismo término señalado anteriormente, el incumplimiento de la sanción impuesta se penalizará conforme al artículo 346 del Código Penal referente al delito de desobediencia, remitiéndose de inmediato las actuaciones al Ministerio Público, dejando un extracto de lo actuado.

En caso de reincidencia del agresor que incurra nuevamente en actos de violencia después de haber cumplido con los mecanismos de protección y una vez dictada sentencia definitiva, le serán impuestas las medidas de seguridad precedidas del Artículo 6 de la presente Ley, remitiendo el caso al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente

Esta misma Ley crea la jurisdicción especial de violencia doméstica que habrá de conocer y aplicar lo dispuesto en la misma Ley, la cual funcionará por medio de los Juzgados y Tribunales especializados en diferentes regiones del país de acuerdo a los requerimientos concretos.

En concretos podemos finalizar diciendo que aunque la Legislación Penal de honduras no tipifique el delito de femicidio como tipo penal, la misma Ley garantiza a la mujer que fue víctima de violencia, seguridad jurídica para algunos casos de violencia.

La (Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010, p,166) cita a Sánchez (2010), quien afirmó que *existe una ruptura y debilitamiento democrático en Honduras a partir del 28 de junio del año dos mil 2010, debido al golpe de estado, es difícil hablar de la situación de la violencia contra las mujeres sin tocar el tema del golpe de estado , porque marcó un hito en lo que son los derechos de mujer y la ruptura del orden constitucional, porque en nuestro caso hubo mucha ruptura.*

Y que según la (Misión Internacional de acceso a la justicia (2010) en “Nicaragua el Femicidio es meramente intrafamiliar y en cambio en honduras el Femicidio se da por la alta militarización que existe”.

Un informe del (Movimiento feminista de Resistencia en Honduras sobre violencia a los derechos humanos de las mujeres, 2010). *Afirmó que desde junio a noviembre del año 2010, están registrados más de 400 violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y ascendiendo, factor principal el ejército.*

De los 400 casos agarraron 230 para sistematizarlos, en estos casos las mujeres manifestaron haber sufrido violencia dirigidas. Al principio era golpes, pero

después se convirtieron en agresiones sexuales con golpes que iban hacia los cuerpos de mujeres, senos vaginas y con mensajes contundentes. , en más o menos de 23 casos, las víctimas manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual y siete fueron violaciones sexuales, realizados por el ejército y la policía Nacional, de estos siete solo una mujer se atrevió a denunciar frente a la fiscalía de los derechos humanos, pero esta se negó a recibir cualquier denuncia relacionada con derechos de las mujeres que no fuera en el marco de la violencia doméstica.

De lo anteriormente descrito podemos decir que la violencia en Honduras de acuerdo a este informe, aumentaron a raíz del golpe de Estado y los toque de queda que se dictaron, ya que a simple vista los toque de queda son instrumento legales donde, los derechos fundamentales de cada persona son vulnerados por el mismo Estado, cuando la patria está en desobediencia civil o catástrofe Nacional.

Pero bien se puede decir con cifras antes descritas que la violencia en honduras hacia las mujeres se debió a la alta militarización y a la falta de respeto a los Derechos humanos de parte Estado hondureño, consagrados en sus leyes internas e internacionales que ha suscrito.

4.6. Contexto actual y Jurídico en Nicaragua de la figura del femicidio.

En nuestro Código Penal Nicaragüense, el delito de Femicidio como en algunos países no estaba incorporada la figura del femicidio como delito penal, y fue partir de la aprobación el día 26 de enero de este año 2012 que se aprobó *Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal (2010)* en especial en su artículo 9.

Se considera cometido el delito de Femicidio, el que en el marco de relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres diere muerte a la mujer en su ámbito público y privado y que existan las siguientes circunstancias.

Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

Es decir mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela y que tenga un resultado reiterado de violencia contra la víctima y que sea de resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo, existencia de menosprecio hacia la víctima para satisfacer sus instintos sexuales a la comisión del delito o actos de mutilación genital u otro o misoginia al igual que el hecho se produzca en presencia de hijos de la víctima o de cualquier otra circunstancias contempladas en el Código Penal vigente a lo relacionado con el asesinato

Desde el punto de vista técnico- procesal dentro de las analogías de los delitos contra la vida, la integridad física y la seguridad personal, que existen en nuestro Código Penal que se incluyen los delitos de homicidio, parricidio y asesinato, la nueva ley establece el tipo penal autónomo como es el Femicidio para dejar a un lado la mala praxis en el tratamiento de los diferentes delitos antes mencionados.

Solo basta llevar a cabo los procedimientos una vez que la ley entre en vigencia, para ver qué tan eficaces y justos funcionen los juzgados especializados en violencia Intrafamiliar, esto a partir de que la Ley no cuenta con un presupuesto para sus funcionamientos.

Al analizar la Ley tal como está, figura como una Ley moderna que se adecua a los procedimientos, nuevos tipos de conductas y formas de violencias y que el Código penal actual no incluye como son, violencia, física, sexual, económica patrimonial, laboral, institucional, la Ley manifiesta los delitos de manera integral y rigurosa, y desnaturaliza algunos delitos como el parricidio a un tipo Penal explícito como es el parricidio, con autonomía a partir del resultado.

Dicha norma jurídica incluye el Femicidio como delito, la cual establece dentro de sus aspectos sustantivo, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relación es de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas y ámbitos.

Aunque el Código Penal califica como delito la VIF, en el artículo 155. Ahora con la nueva ley desde el punto de vista técnico-procesal se ve la violencia como un delito de resultado y no como un delito autónomo, lo que algunos penalistas consideran que los actos de violencia que penalizan son los de resultado, si el resultado fue la muerte, hay muerte más asesinato, más homicidio en las circunstancias en que ocurrieron. El resultado fue la muerte, eso es lo que va a pedir que se castigue en la sentencia.

Podemos decir de manera análoga que por el asesinato de una mujer el homicida puede recibir todo el peso de la Ley si la tipificación y sanción son claras, es decir reglas bien definidas para el castigo, sanción de un delito contra la mujer, para no quedar bajo el amparo de la impunidad, se necesita voluntad política para resolverse sin dilaciones apegados a procedimientos justos y eficaces.

Según la elaboración de un estudio de la Comisaria de la mujer y la niñez de la Policía Nacional, Pn (2008)), sobre diagnóstico sobre el abordaje de la Violencia Intrafamiliar y sexual en Nicaragua y ofreció un mapeo sobre los actores, roles y perspectiva, así como un trazado del camino recorrido y las lecciones aprendidas entre los años 2003 y 2008.

Dicho estudio reconoce: que es difícil determinar cuál es la situación real de la violencia contra las mujer ya que en la región centroamericana la disponibilidad de

información, sub registro y el registro inadecuado de datos, así como la confusión conceptual de femicidio (asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres) como homicidio, constituye factores que limitan la presentación de la mujer.

En virtud de lo antes relacionado podemos decir al no reconocer el Femicidio como delito de lesa humanidad ni tipificar el Femicidio desde el punto de vista de la privación violenta de la vida de una persona por ser mujer, visibiliza y descriminaliza la muerte de las mujeres por causa de violencia de género.

Otra de las novedades que se destaca en este estudio en relación al Femicidio es lo difícil reflejar la magnitud de la violencia de género ya que se dan, a nivel Nacional y Centroamericano, cifras divergentes, lo que evidencia la falta de aplicación de un enfoque coordinado de las .en las investigaciones de casos de homicidio de mujeres, y en los informes oficiales.

Si bien es difícil realizar una comparación de la región al no contar con información homogénea en las categorías y el registro, si es posible inferir que en todos los países de la región centroamericana el femicidio se ha venido incrementando

Por otro lado el mismo estudio, reconoce que las legislaciones centroamericanas vienen construyendo el marco legal para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, llegando incluso a algunos países a tipificar el Femicidio o Femicidio como es el caso de Guatemala y Costa Rica.

Con la incorporación y reformas a la Ley No. 641 Código Penal de Nicaragua de la figura Penal del femicidio, el Estado reconocerá los derechos de cada mujer a vivir sin violencia al mismo tiempo cumplirá con los compromisos internacionales e instrumentos legales como la CEDAW y Belem Do Pará, que Nicaragua a suscrito y adoptado para no seguir permitiendo más muertes Pará de mujeres a manos de sus conjugues, ex compañeros o familiar ligado a la víctima de violencia, y.

Que según los datos de la (Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), 2011), las clasifica con cuadros y estadísticas de la siguientes manera. 76 Mujeres Asesinadas en el año 2011, de las cuales se encuentran 24 asesinos prófugos de

la Justicia, 27 que están siendo Juzgados, femicidios sin respuesta 4, asesino que se suicidó 4 y 1 asesino fue ultimado por el esposo de la víctima, 6 condenados de 1 a 24 años de prisión, 1 se quitó la vida después de haber discutido con su pareja, tenía tres meses de gestación 1 se quitó la vida de no aguantar el maltrato que recibía de su esposo y por ultimo 3 asesinatos no esclarecidos, mismos datos coinciden con el monitoreo de los medios de comunicación que registra 76 muertes de mujeres asesinadas, cifras que presentan una reducción de 13 menos comparados con el año 2010 que cerró con 89 crímenes contra la mujer,

Según la (Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), 2011), dentro de sus observaciones establecen: Las mujeres jóvenes en su vitalidad de vida están siendo asesinadas. Existe saña y crueldad, se evidencian en los asesinatos de mujeres y niñas. Prevalecen violaciones desmembraciones, estrangulación, puñaleadas, ahorcadas y quemadas sus cuerpos, como escenario del crimen en este año prevaleció el lugar más seguro “casa” seguido de la calle. Solo en el año 2011, el arma corto punzantes sobresale como el principal instrumento utilizado para cometer Femicidios, seguido del arma de fuego y la fuerza física. Managua, es el Departamento con mayor incidente de Femicidios seguido de la región autónoma Atlántico Sur, RAAS y Matagalpa.

Comparados con los datos que maneja (la comisaria de la mujer, niñez y adolescencia (PN), 2011), registra 34 Muertes de mujeres, clasificados en parricidio, homicidio y asesinatos, esta no la clasifica como femicidio porque no existe como tal el delito en nuestra legislación.

Según (Memoria del primer encuentro de Mesoamérica y el Caribe con la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010).

En cuanto a los avances en nuestro país se registra la aprobación de la Ley de Responsabilidad paterna y materna y la ampliación de las comisarías de la mujer, en la Policía Nacional, igualmente se han ido creando instancias especializadas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que posee el protocolo de normas de

atención y procedimiento para la violencia Intrafamiliar, lo mismo sucede con el sistema de Justicia que cuenta con un protocolo de actuación.

El mismo encuentro señaló a través de las delegaciones, que en Nicaragua existe un retroceso a grandes rasgos, en cuanto al proceso de institucionalidad frente a la respuesta de violencia intrafamiliar, Nicaragua, enfrenta graves desafíos como honduras, según informe de país Nicaragua, a pesar de la existencia de una Ley de responsabilidad paterna y materna, su aplicación se ve limitada por falta de acceso gratuito a las pruebas de ADN.

El grupo Venancia (2010), citada por la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010, p. 33), afirma que la mayoría de las denuncias que reporta la comisaria de mujer terminan en mediaciones y/o cierres administrativos, a pesar de la formulación del Plan Nacional para la prevención de la violencia /2001-2006). Resalta que dicho plan no cuenta con los recursos necesarios, ni tiene presente los posibles diálogos con el Movimiento de Mujeres Nicaragüenses por parte del Gobierno de Nicaragua.

Otro de los aspectos que menciona la (Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (ONU), 2010), según la delegaciones de Nicaragua, las posibilidades de dialogo con el gobierno es nula y por el contrario el Gobierno de Nicaragua ha emprendido cruzadas fundamentalistas que atentan contra los derechos de las mujeres, habiendo retroceso en la legislación y la seguridad personal e integridad de mujeres que atienden a las víctimas de violencia Intrafamiliar y de pareja, se resalta una persecución hacia los defensores de los derechos humanos de las mujeres por parte del Gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica.

Uno de los hechos importantes además de los mencionados por la relatoría de naciones unidas en materia de igualdad de derechos y deberes de hombre y mujeres es la Ley de Igualdad de derechos y Oportunidades y su reglamento, la cual garantiza la igualdad de condiciones derechos, deberes en materia de Derechos a la mujer en forma integral y participar efectiva y publica en la formulación de políticas pública, es decir mayor acceso a la educación salud,

justicia, trabajo e información, garantizar los derechos laborales de las mujeres, prevención, atención y detección de la violencia en contra de las mujeres y la familia, equidad en el acceso de las mujeres a los espacios de poder y toma de decisiones.

Además planes programas y proyectos para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, económicos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, y que en la practica el estado manifiesta la voluntad de restituir los derechos de las mujeres, a través de cargos públicos en cada institución, que si bien es cierto se puede decir que es gradual no así el grado de exclusión que sufren otras mujeres.

Es de lamentar que en Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) ha cambiado su rol de rector de políticas públicas, convirtiéndose en un ejecutor de proyectos” (Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres ONU, 2010.p.53).

Relacionamos esta disposición de la relatoría de las Naciones unidas ya que es de gran preocupación el hecho de que en la “Ley 648, Ley de Igualdad de derechos y Oportunidades y su reglamento (Gaceta N° 51,” 2008), el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM es el órgano rector para la aplicación y seguimiento de las políticas públicas con enfoque de género y que la misma no cumpla con el mandato de Ley que según nuestro criterio no actúa de manera beligerante misma que no tiene protagonismo para sus propias decisiones.

En cuanto a la mediación o resolución para resolver los conflictos de violencia intrafamiliar Nicaragua es uno de los países que lo utiliza, lo cual significa una contradicción, ya que de acuerdo a nuestro juicio, la mediación no puede ser utilizada en situaciones donde la vida de la víctima o de las víctimas están en peligro inminente de muerte ya que constituye en uno de los principales mecanismo que permiten la impunidad, lo que evidencia un importante número de casos de violencia intrafamiliar.

Que divergente es este recurso de mediación ya que en los delitos de gravedad dentro de los que se incluyen violación, abusos deshonestos y el estupro, no lo aplican pero si en el delito de violencia intrafamiliar.

Para poner fin a esta práctica mal utilizada del recurso de mediación en nuestra legislación y operadores de justicia, es el hecho que la Ley integral de violencia hacia las mujeres expresamente lo prohíbe en su artículo 46 de la presente Ley.

En el mismo sentido, se debe de considerar que si bien la mediación aparece como un recurso que permite agilizar procesos, requiere de una correcta tipificación de los delitos, así como la existencia de condiciones de efectividad equipolencia entre las partes, incluyendo la efectiva asesoría legal a la víctima a fin de que sean preservados sus derechos. También se requiere de cierta capacidad de supervisión del poder judicial por que los acuerdos asumidos entre las partes no se reviertan en contra de la víctima sino a favor del agresor.

De manera general los países de Centroamérica tienen en común los siguientes aspectos.

Abordan la violencia hacia las mujeres de una manera más general lo cual permite que se tipifiquen conductas que el ordenamiento jurídico no había considerado como hechos antijurídicos y delictivos.

Solo dos países cuentan con leyes de naturaleza penal que abordan la violencia contra las mujeres desde un perspectiva que incluye una diversidad de manifestaciones relacionadas con la violencia, física, sexual emocional – psicológica y patrimonial, que por su formulación alcanzan a proteger a la mujeres según lo establecido en la convención de Belem Do Pará y CEDAW.

En la mayoría de los países de la región se avanzó hacia la promulgación de leyes de penalización de la violencia contra la mujer con una perspectiva más integral, contemplan diversa formas de violencia, tales como la psicológica, física sexual y patrimonial, que se producen en los diferentes ámbitos, lo que resultó en nuevos tipos penales.

Fundamenta su interpretación en los principales instrumentos de protección de los derechos humanos de las mujeres.

Las características comunes de esas leyes son; la no neutralidad en el sujeto protegido, ya que las sujetas protegidas son las mujeres, rompiendo la visión feminista y la supuesta neutralidad de las normas, respondiendo así el marco de los derechos humanos, especialmente a la legislación antidiscriminatoria que se basa en la especificación de los titulares, en la igualdad sustantiva y por supuesto en el derecho de vivir una vida libre de violencia para las mujeres.

La penalización y creación de nuevos tipos penales contempla el femicidio en Costa Rica, Guatemala y se unió a esta corriente legislativa El Salvador. Algunos países como Costa Rica consideran el Femicidio privado que resulta de la muerte de su cónyuge o compañera que se encuentren en una relación de hecho declarada o no.

Uno de los vacíos o debilidades de este tipo penal es que no especifica la intención, lo cual podría derivar en una interpretación equivocada, por ejemplo caso de homicidio imprudente u otra circunstancia que no tienen la intencionalidad misógina que caracteriza el delito de Femicidio.

El tipo penal en Guatemala establece el Femicidio en el ámbito público y privado determinando las circunstancias que lo declaran.

La creación de fiscalía especializada dentro de lo Ministerio Público que conocen de temas relacionados con la violencia sexual, doméstica o de género, así mismo de la presencia del personal especializado en este tipo de delito ha favorecido a las víctimas pero se requiere de mayor cobertura y profesionalización.

Por la experiencia acumulada se recomienda tener leyes de penalización que aborden la violencia de género contra la mujer y que sean elaborada desde una perspectiva integral contemplando las diversas formas de violencia existen: psicología, física, sexual y patrimonial en los diferentes ámbitos.

En todas las leyes prevalece el grado de responsabilidad de los estados y que se fundamentan en los derechos humanos de la mujer en especial de la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer (Belem Do Para) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW.

5.- Análisis de la Incorporación de la Figura del Femicidio en nuestra legislación Penal.

5.1.- Importancia de Incorporación de la figura del femicidio como tipo penal.

Es de necesidad la figura del Femicidio de cómo tipo Penal, porque que la constitución política de Nicaragua establece en sus artículos 4 y 5 dentro de sus principios fundamentales la protección a todas y a todos las Nicaragüenses de todas las formas de discriminación y exclusión y el respeto a la dignidad de la Persona humana.

Igualmente consigna dentro del catálogo de garantías constitucionales la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de los derechos humanos de las mujeres incluidas en los artículos 23, 24, 37 y 48 de nuestra carta magna.

Evidentemente, nuestra carta magna, reconoce la existencia de derechos fundamentales de las mujeres en igualdad de condiciones, en relación a que se respete su dignidad e integridad física, y el derecho de solicitar protección a los mismos cuando sus derechos están siendo vulnerados.

Es necesario la incorporación del delito de Femicidio a nuestro Código Penal de Nicaragua, ya que con la entrada en vigencia del mismo en el año 2008, los jueces y juezas están aplicando un nuevo tipo penal denominado violencia doméstica o intrafamiliar en particular en el artículo 155 Pn, sin embargo no se penaliza la violencia patrimonial, ni el Femicidio como una muerte extrema que se causa a las mujeres por el hecho de serlo, razón de esto es que aún persisten en las sociedades actitudes, comportamientos y omisiones que socialmente no la reconocen como Ley.

Aunque el principio de igualdad este consignada en nuestra constitución política de Nicaragua en especial la Ley de igualdad de Derechos y oportunidades donde todos somos iguales ante la Ley, lo cierto es que en la práctica la igualdad es utilizada como medios propagandistas por los Estados.

Es importante la incorporación del femicidio a nuestro Código Penal Nicaragüense, porque la manera de cómo se asesinan a las mujeres no puede castigarse de la misma manera como se castiga al hombre, porque el agresor o victimario para quitarle la vida a una mujer parte de la desigualdad y vulnerabilidad de la misma, partiendo del hecho de que es mujer, el hombre la considera un ser inferior y eso está demostrado a través de los analices y estadísticas de muertes de las mujeres y hombres, en las muertes de las mujeres existe saña, ensañamiento, premeditación alevosía ventaja, a una mujer la matan de 45 puñaladas.

Es importante la incorporación del femicidio a nuestro ordenamiento penal, ya que las muertes de mujeres de manera violenta comparados con la muerte de hombres, es más violenta, a las mujeres primero la violan, la queman, mutilan, decapitan, cortan sus brazos y luego la asesinan, en cambio la muerte de los hombres es menos cruel, razón es que al hombre lo matan con una estocada fatal, esto no quiere decir que a los hombres lo deben matar, sino que la manera de morir en relación a las mujeres es menos cruel.

Existe una realidad y hay que cambiarla, y, es que los hombres se aprovechan de su condición de la mujer, es decir parte de la desigualdad de la mujer, elemento que el agresor se toma para agredirla, porque para él la mujer es indígena, discapacitada o tiene síndrome de Down, no puede dársele su libertad sexual y es por eso que el hombre se aprovecha, porque la considera de su propiedad, patrón cultural en el que el hombre por siglo ha venido ejerciendo en contra de la mujer, porque todo se basa en una relación de poder, de dominio y de control, ya que las mujeres no tienen derechos y estos derechos son para las personas agresoras.

Evidentemente es eso lo que hace la necesidad a tener un tipo penal que regule todas estas circunstancias porque a la mujer se le mata por odio, misoginia, discriminación.

Un ejemplo de lo antes planteados en nuestra vida cotidiana, cuando las noticias informan una muerte de una mujer, sobresale la mato por que le fue infiel, es decir se justifica la muerte porque es infiel la mujer, la noticia informa el hecho, pero

está diciendo, “por celo la mató” se justifica la violencia de una o de otra manera enmascaradamente.

El delito de Femicidio en nuestro Código Penal de Nicaragua es de necesidad ya que como todo ordenamiento jurídico basado en las exigencias de modernidad debe de incorporarlo, dado que a medida que nacen nuevos delitos, los mismos deben de regularse, sancionarse y castigarse como es el caso de la violencia Intrafamiliar que si bien es cierto lo castiga no así el femicidio, que ante de la aprobación de la Ley integral de violencia contra las mujeres y reformas al Código Penal.

Se debe de incorporar la figura del femicidio a nuestro Derecho interno, primero, porque nuestro país debe de cumplir compromisos internacionales al ser suscriptores de Belem do Para y parte del Protocolo de la CEDAW, que establece que como Estado tiene la obligación de incorporar a nuestro Derecho Interno, todas aquellas leyes que vienen a darle un tratamiento integral que tiene que verse desde el punto de vista de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y que en la actualidad, esta violencia es solamente vista desde el punto de vista privado que es lo que entendemos como violencia intrafamiliar sino debe de ser vista la violencia que sufren las mujeres desde el ámbito público.

Es importante su inclusión porque el Estado debe de reconocer que la violencia no solamente es física o psicológica sino debe de recocerse que la violencia es física, sexual, patrimonial, los cuales deben de verse desde el ámbito público y privado y tratar el problema desde las distintas manifestaciones del comportamiento delictivo.

Es importante la incorporación como tipo Penal la figura del Femicidio ya que nuestro Código Penal, contiene vacíos legales en cuanto a su aplicación y procedimiento los cuales deben de eliminar, a razón de lo antes expuesto es la mediación en los casos de VIF, siendo la puerta de salida para el agresor pero es una llave para la muerte de la mujer ya que la gran mayorías de las muertes según estadísticas habían mediado, en la mediación la mujer no está en capacidad de

negociar porque la mediación es un acuerdo de voluntades y la voluntad de las mujeres siempre está viciada.

La importancia de la figura del Femicidio, es que existiría un tipo penal autónomo explícito y adecuado a los procedimientos y exigencias de las mujeres

Otro aspecto importante en cuanto a la necesidad de incorporación y reforma al código penal de Nicaragua de la figura del Femicidio como tipo penal en nuestro y, es, que en nuestro derecho interno predomina el concurso de delito y los clasifica en parricidio, asesinatos y homicidios encontrándose una debilidad por que si los vamos al delito de parricidio con relación al femicidio, según el arto 139 Pn “Ley No.641: Código Penal Nicaragüense *que textualmente establece:*

Parricidio. Quien, a sabiendas del vínculo que lo une, prive de la vida a su ascendiente, descendiente, hermano o conyugue o conviviente en unión de hecho estable, será sancionado con una pena de quince a veinte años de prisión.

Partiendo de esta definición, existe una limitante en cuanto al delito de parricidio, y, es el hecho que parte de los operadores de justicia relacionan parricidio con el Femicidio, y, lo observan desde su ámbito privado de violencia intrafamiliar, apegado a los elementos circunstanciales arriba enumerado.

En cambio el Femicidio va más allá de estos elementos circunstanciales de las elaciones de convivencia verbigracia de lo dicho es que las estadísticas arrojadas por las organizaciones contra la violencia hacia la mujer y monitoreo de los medios de comunicación, muchos de las muertes de la mujeres la cometen sus ex compañeros de vida. Por tal razón debe de especificarse con precisión el delito de Femicidio como un delito autónomo y de resultado.

El Estado de Nicaragua como representante y garante en el cumplimiento de los derechos de las mujeres ratificado en instrumentos internacionales, necesita implementar, leyes, Decretos, y reformas a nuestro Código Penal en coordinación con los encargados de dictar leyes para evitar y seguir visibilizando a las mujeres y ver el problema del Femicidio como una pandemia y salud publica esto porque

los operadores de justicia necesitan de herramientas jurídicas especializadas para tratar el problema de la violencia y el Femicidio éste último como tipo penal.

La incorporación del tipo penal del Femicidio a nuestro Código Penal, garantizará una mayor apertura al tratamiento de este delito, mayor seguridad, efectividad y tutela jurídica, ya que al agregar este tipo Penal, el Ministerio Público como responsable de la titularidad de la acción Penal, tendrá más precisión jurídica, una mejor tipificación penal, y una mayor efectividad y resultado.

Esto porque nuestro ordenamiento jurídico en materia jurisdiccional ha sido ineficaz esto según la demuestra a través de una visita a nuestro país del organismo (misión internacional de acceso a la justicia, 2011) afirmaron.

El tema de la violencia de la mujer y la muerte de mujeres en la región son un problema muy serio, un problema de grandes atenciones desde el punto de vista político administrativo y judicial, existe serias carencias del acceso de la justicia de la mujer que son asesinadas y el tratamiento de atención que se le dan a los parientes cuando buscan justicia para las mujeres. Existe un menosprecio de la vida de mujer y por lo tanto no había respuesta institucional.

De lo antes mencionado la violencia intrafamiliar a como está establecida en nuestra legislación no contribuye en nada para evitarla se necesita voluntad política, para proceder a la eficacia del mismo.

Asimismo, hacer del tipo penal el delito de Femicidio y reconocerlo en el Código Penal permitiría establecer una calificación más explícita del mismo y, por ende, un sistema de Registro policial único que permita unificar criterios través de cifras, estadísticas, egresos e ingresos del delito para dar seguimiento al sistema de justicia para visibilizar la situación de la violencia de género en todo el país. Lo que permitiría establecer sanciones penales específicas que develarían una situación hasta ahora confundida con los delitos de parricidio, asesinato y homicidio.

Por ejemplo de estos comentarios, cada instancia administrativa, te da un numero en cuanto a las muertes de mujeres y los califica como tal, habiendo un desequilibrios de cifras y estadísticas del asesinatos de las mujeres, como es el caso de la Policía Nacional a través de la comisarías de la mujer que cerró el año

dos mil doce con 34 mujeres muertes dándole una calificación penal de acuerdo al Código Penal así también la (Red de mujeres contra la Violencia (RMCV), 2011) que cerró con 79 muertes, los cuales la califica como Femicidios.

5.2 Aspectos procedimentales.

Al cometer el delito de violencia intrafamiliar la víctima de este delito debe de acceder a la ruta de acceso a la justicia de la siguiente manera, esto a partir de la definición del artículo 155, delito de violencia intrafamiliar establecida en nuestro Código Penal Nicaragüense, y que para que exista este ilícito, deben concurrir o existir:

Cualquier tipo de fuerza, violencia, intimidación física o psíquica contra quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, o sobre las hijas e hijos propios, del cónyuge o del conviviente fuera de los casos del derecho de corrección disciplinaria, o sobre ascendencia o discapacitados que convivan con él o con ella o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela o guarda de uno u otro y como consecuencia de la realización de los actos anteriormente señalados, y que se ocasionan:

Lesiones leves, con pena uno a dos años de prisión; lesiones graves, pena de tres a siete años de prisión, y, lesiones gravísimas, con pena de que va de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los encontrados responsables de violencia intrafamiliar se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo periodo de los derechos derivados de la relación, madre, padre e hijos, tutela o guarda.

Posteriormente a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, se les dictaran medidas de protección de urgencia de conformidad al arto.111Pn estatuidas en nuestro Código Penal Nicaragüense, las cuales se incluyen:

Cuando la acción u omisión hubiere sido cometida por un miembro de la familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad dentro de la

familia conviviente o en unión de hecho estable, la autoridad judicial del lugar donde ocurrió el hecho, a petición de parte, podrá aplicar, según el caso, las siguientes medidas de protección:

Ordenar el abandono inmediato del imputado o acusado y reintegrarla al hogar que fue sacada con violencia o intimidación;

Asimismo prohibir o restringir la presencia de la persona denunciada en la casa de habitación de la ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo de ciento cincuenta metros; igualmente ordenar la reintegración de la persona ofendida al hogar del que fue sacada con violencia o intimidación.

Prohibir o limitar la presencia de la persona denunciada al lugar del trabajo de la persona ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo de ciento cincuenta metros, además se debe de garantizar a la persona ofendida la atención médica, psicológica o psiquiatra, en caso de que sea necesario, ordenar el examen Bio-Psico-Social a los menores de edad involucrados en hechos de violencia doméstica o intrafamiliar y brindarle su debida atención.

Y, en caso de denuncia de maltrato infantil, se solicitará a la autoridad correspondiente la intervención de organismos especializados que realizan la investigación y brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento respectivo; prestación de garantías suficiente que lo determinara el juez en lo que hace a daños causados a la persona ofendida.

En el caso que la víctima sea menor de edad con problemas de discapacidad, el judicial competente confiara provisionalmente la guarda a la persona idónea cuando estaba a cargo del agresor.

Una prohibición de hostigamiento que perturbe la tranquilidad de la ofendida con medios electromagnéticos o de otra índole.

Y en caso de armas ocupadas legales o no, se estipula una orden de decomiso de armas aun cuando la misma este legal de conformidad a la Ley de armas.

En los casos de la Costa Atlántica las medidas serán aplicadas por la autoridad comunal de conformidad al derecho consuetudinario y leyes vigentes, las medidas se adoptaran a partir del conocimiento de los delitos, auxiliándose de la Policía Nacional, y, en caso de incumplimiento de parte del imputado el juez ordenara o aplicara una medida más grave a instancia de parte.

En relación las medidas de protección establecidas en la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres, es más extensiva y rigurosa en el sentido que la violencia intrafamiliar se establece desde dos puntos de vistas, público y privado, y el Código Penal Vigente lo penaliza desde el punto de vista privado, a razón de lo antes planteado podemos describir algunos alcances de las medidas de protección en comparación al Código Penal de la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres.

La norma jurídica establece dos medidas, precautelares y medidas cautelares, las cuales tienen naturaleza preventiva, es decir se trata de dar protección a la víctima mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial así como toda acción que viole o amenace los derechos contemplados en esta ley, evitando nuevos casos de violencia.

Las medidas precautelares se dictan cuando, se presume alguna acción o omisión que constituye algún delito referido en la Ley, y que la Policía Nacional a través de la Comisarias de la Mujer y niñez, los jefes de delegaciones Distritales y Ministerio Público a pueden ordenar y adoptar a diferencia de lo estipulado en el arto 111 Pn puesto que hay va más allá de la autonomía de la voluntad independientemente de su titularidad, ya que se habla que la violencia se concibe como riesgo para su integridad, física, sexual y patrimonial de la mujer,

Y, además, prohibir y restringir al presunto agresor la presencia en la casa de habitación, trabajo, estudio, lugares habitualmente frecuentados por la mujer o cualquier otro lugar en un radio de doscientos metros, es decir hay una mayor protección dentro y fuera de la casa así como también el radio que es de doscientos metros y no cincuenta como lo establecido en nuestro Código Penal vigente

Se visualiza a la mujer víctima de violencia, desde el punto de vista pública y privado para darle una garantía a la integridad a la misma mujer, otra de las garantías de protección es el reintegro de la mujer a la vivienda cuando se le impide el ingreso o donde fue expulsada independientemente de la titularidad del inmueble, ordenándole dentro de la resolución la salida del presunto agresor.

Asimismo se le garantiza la atención médica integral necesaria, y posteriormente se le ordena hacer exámenes médicos social y psicológicos cuando la violencia es directa o indirectas a los niños, niñas y adolescentes para su debida atención, que podrán ser atendidas en caso de vulneración con intervención al Ministerio de la familia adolescencia y niñez, con colaboración de organismos especializados que brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento necesario.

Además se le prohíbe al agresor realizar actos de intimidación u otros a cualquier miembro de la familia u otras personas relacionadas con la denunciante o terceros o cualquier otro medio, igualmente secuestrar o retener cualquier arma de fuego o armas cortopunzantes y contundentes que se encuentren en manos del agresor, con o sin permiso que porte o su profesión u oficio, remitiéndose las mismas a la Policía Nacional y su destino lo dispondrá según las disposiciones de Ley Especial de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, Ley de la Policía Nacional, Código Procesal Penal y Ley No. 641 Código Penal.

Una prohibición absoluta al agresor para que introduzca o mantenga armas de fuego en la casa de habitación para efectos de coacción o daños a los grupos familiares, igualmente levantar un inventario de los bienes muebles con el fin de salvaguardar el patrimonio de la mujer y sus hijos.

En cuanto a las medidas cautelares establecidas en la misma Ley, estatuidos en el arto 25 estas serán decretadas por el juez o tribunal a solicitud del Ministerio Publico o la víctima constituida en acusador.

Se le ordenara al agresor presunto a someterse a examen psicológico o siquiatra que el mismo considere necesario al mismo tiempo deberá de prestar las garantías suficientes que determine el juez para compensar los posibles daños a

la mujer y en caso que la comisión del delito se cometió en presencia de niños o adolescentes o persona con discapacidad, la tutela podrá ser conferida provisionalmente a la que el juez considere idónea, si la misma estaba confiada al presunto agresor.

En el caso de dependencia económica del presunto agresor con la mujer para su subsistencia el judicial impondrá la obligación de proporcionarle alimentos en caso que no disponga de medios económicos, considerada esta resolución de provisional al mismo tiempo imponerle al presunto agresor la obligación de proporcionarle alimentos a sus hijos e hijas provisionalmente que garantice su subsistencia hasta que no se dicte la tasación de alimentos.

Al mismo tiempo el judicial suspenderá las visitas al presunto agresor a los hijos e hijas e interferir en el ejercicio de la tutela, cuidado crianza y educación cuando estos hayan sido víctimas de violencia o cuando estaban bajo la tutela de la madre ya sea en la casa, albergue o en cualquier otro lugar que brinde seguridad,

El judicial emitirá una orden judicial y auxilio judicial a la Policía Nacional con copia a la víctima de violencia para que acuda a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro y fuera de la casa

En cuanto a las medidas o acciones legales en materia de alimentos se le prohíbe al agresor a celebrar contratos sobre bienes muebles e inmuebles, así como su desplazamiento hacia otro lugar cualquiera ya que esta bajo inventario judicial.

Novedad en cuanto a esta medida es el hecho que el judicial podrá ordenar una orden de alejamiento al mismo tiempo inhabilitación de portación de arma y finalmente ordenara la retención migratoria al presunto agresor.

En cuanto las medidas de protección estatuidas en el Código Penal Vigente en relación a las establecidas en la Ley, podemos considerar que la violencia Intrafamiliar y Femicidio visibilizan a la víctima de Violencia y no la re victimizan, así mismo estas medidas dan protección de manera integral antes y después del proceso a la mujer víctima de violencia involucrado a ex parejas, parejas etc.,

dentro y fuera del domicilio y involucra a los funcionarios públicos que impiden al acceso de la justicia

Estas medidas serán dictadas u observadas bajo los criterios de proporcionalidad, racionalidad necesidad y urgencia, éstas medidas que antes se relacionaron, son para evitar que la situación de violencia se agrave o para restituirles sus derechos.

Procediendo a lo señalado a la ruta de acceso a la justicia de la mujer conocida como la ruta crítica una vez recepcionado la denuncia por parte de la víctima de violencia ante la delegación policial o comisaria de la mujer y tener los argumentos legales para su detención de privacidad, deberá de ordenar la detención inmediata del agresor sin necesidad de orden judicial, cuando este sea sorprendido en flagrancia del delito o dentro de las doce horas de tener conocimiento de los hechos cometidos.

De conformidad al artículo 231 CPP “Ley No.406: Código Procesal Penal Nicaragüense, una vez presentada la denuncia en la delegación policial y o comisarías de la mujer, los funcionarios tienen las obligaciones, siguientes:

Recepcionar las denuncias aunque no sea de la misma comunidad y brindarle un trato respetuoso y con preferencia al mismo tiempo si la victima necesita atención médica de urgencia deben de trasladarla al lugar de salud más cercano., según el artículo 237 Cpp se realizará la inspección corporal cuando hay probabilidad fundada de comisión de un hecho delictivo, respetando su pudor e integridad. Cuando la inspección afecte las partes íntimas deberá efectuarse por personas del mismo género.

Posteriormente coordinar con el fiscal Ministerio Publico la investigación de los hechos investigados de los hechos denunciados, de conformidad al artículo 248 Cpp, colaboración y participación directa.

Por su condición de acusador en el ejercicio de la acción penal, podrá dar directrices a la policía nacional para orientarlo al acto de investigación en casos concretos orientadas a recolectar las evidencias necesarias (documentos, fotos testimonios, cartas vestimentas exámenes médicos, psicológicos, instrumentos, u

objetos con que se cometió el delito, recepcionándose la declaración en privado, si existe evidencias visibles de lesiones físicas, deberán de acompañar a la víctima al instituto de medicina legal o al médico forense de la comunidad o localidad.

La víctima de violencia intrafamiliar no está obligada a llevar las citas al agresor. Una vez comunicado el presunto agresor por la Comisaria de la Mujer y niñez, deberá poner en conocimiento al Ministerio Público (fiscal de la delegación) para que elabore el interrogatorio, con sus criterios técnicos jurídicos y objetivo el Ministerio Público a través del fiscal está obligado por la Ley a presentar la acusación ante el juez competente, de conformidad al artículo 51 Cpp, e interponer la acusación acompañado por los elementos de convicción, suficientes, fehacientes y técnicos para llevar a juicio oral o público al acusado por violencia intrafamiliar.

Agotados los procedimientos de investigación y formulación de la acusación, y recepcionado por el juez o jueza, los operadores de justicia tienen el deber y obligación de dar trámite a la acusación siempre y cuando encuentren elementos suficientes de pruebas y deberán en las audiencias preliminar o inicial decretar las medidas cautelares que garanticen la seguridad de las víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF), garantizándole la mujer, que las audiencias del juicio oral sean rápidas y efectivas para evitar que el agresor coincida con la víctima en el mismo lugar de espera.

Juicio Oral y Público del delito de VIF.

Una vez agotados los procedimientos de Investigación y formulación de la acusación y los elementos de pruebas presentados ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causa (ORDICE), por el Ministerio Público (fiscal) y Víctima constituida en acusadora particular, la Oficina de Distribución de causas seleccionará de manera aleatoria el Juzgado o Juez que llevará el Expediente Judicial, para proceder a la audiencia que puede ser, audiencia inicial si hay reo detenido o Audiencia inicial cuando no lo hay, la primera con la finalidad, a) *hacer del conocimiento del detenido de la acusación*, b) *resolver sobre la aplicación de las medidas cautelares*, y c) *garantizar el Derecho de la defensa*.

Y, la segunda con la finalidad, a) *determinar si existe causa para proceder a juicio*, b) *iniciar el procedimiento para el intercambio de información sobre prueba*, c) *revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y*, d) *determinar los actos procesales que tomaran lugar en juicio* ambas apegadas a los requisitos de admisibilidad de la acusación contenidas en el Código Procesal Penal de Nicaragua, Ley No. 406, regidas bajo los principios de oralidad es decir que la audiencia se desarrollara en forma oral en lo relativo a alegatos y argumentaciones público, con algunas restricciones, contradictorio, principio de concentración. Ininterrumpida concentra y continúa y, legalidad. (artículos 254 y 255 CPP y “Ley No.406: Código Procesal Penal Nicaragüense (“*La Gaceta*, No. 243 y 244 del 23 de diciembre 2001”),).

En éste juicio oral y público se deberán de debatir los hechos presentados por las partes procesales, los elementos de convicción y pruebas científicas y técnicas mismas que deberán ser lícitas.

Seguidamente, se presentaran las pruebas en orden, con la custodia requerida de las mismas, establecida en el Código Procesal Penal, todas aquellas pruebas documentales, periciales que confirmen los hechos presenciados.

Posteriormente, se le tomara la promesa de ley a los testigos de cada una de las partes, vertiendo sus declaraciones en hechos presenciados por ellos mismos, y, que las mismas serán valoradas o desestimadas por el Juez, cuando no correspondan con la veracidad de sus declaraciones.

Cada uno de los testigos, serán interrogados por el Acusador particular si lo hubiera, defensor y fiscal, en los casos de dictámenes médicos y psicológicos comparecerán los profesionales cuando fueron ofrecidos por las partes.

Durante las declaraciones en el juicio velaran para que no se desarrollen términos que atenten contra su dignidad, impidiendo preguntas capciosas o sugestivas e impertinentes y impedir que se realicen nuevas pruebas , a menos que sean indispensables para completar el delito y no hacer preguntas que agredan la

dignidad de las personas o que no tengan que ver con la acusación y a la vez valorar todas las pruebas presentadas que conduzcan a verificar los hechos, incluyendo el testimonio de la ofendida o agredida.

Durante el juicio la mujer agredida tiene los derechos.

- 1. Conocer oportunamente la propuesta del acuerdo mediante el cual el ministerio publico presidirá total o parcialmente de la persecución penal y hacer uso de los recursos previstos en el Código Procesal Penal para evitar la impunidad del delito.*
- 2. Ser informado por el fiscal sobre los procedimientos que se desarrollaran en el juicio oral y publico*
- 3. Constituirse en el proceso como acusadora, o bien estar asistida por una abogada o abogado particular y pedir que se le dé la intervención en las audiencias independientemente del rol del fiscal.*
- 4. Ofrecer todos los medios o elementos de pruebas incluyendo su propio testimonio.*
- 5. Impugnar o apelar las resoluciones judiciales cuando sean injustas o considerada que se han violado los procedimientos establecidos en la ley.*
- 6. Ejercer la acción civil para que le paguen por los daños y perjuicios causados por el delito.*

El juez o jurado después de escuchar los alegatos o argumentos expuestos por cada una de las partes proceden a emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia y debate de pena en audiencia especial y que posteriormente se notificara a las partes a través de cédula judicial la sentencia final.

En comparación al procedimiento, establecido en la Ley Integral de Violencia Hacia las mujeres, difiere algunos aspectos, como el acompañamiento de las víctimas de parte de un psicólogo, siquiatra o de cualquier persona con la finalidad de asistir a las victimas ante una posible crisis producto de la vulnerabilidad emocional presentada(arto 42 Ley Integral de Violencia Hacia las Mujeres) y el anticipo de pruebas personal cuando la víctima o testigo sea vulnerable ante ofrecimientos pecuniarios y manifestaciones de violencia, asimismo por razones

de reprogramaciones, suspensión e interrupciones de juicio oral y público, cuando las víctimas se vea imposibilitada de presentarse o prolongar su permanencia en el asiento del tribunal para acudir a la nueva convocatoria de juicio, esto para evitar que el desgaste económico de las víctimas de VIF como sucede en la actualidad.(ver arto 44 inciso a y b de la Ley contra la violencia hacia las mujeres).

Así mismo esta ley prohíbe la mediación entre víctimas y agresores.

De condenarse, a los agresores en caso de VIF, la Ley, antes referida de conformidad al arto, 47, podrá solicitar a través de su representante legal, al Ministerio Público, el ejercicio del derecho de restitución, reparación de daños e indemnización de perjuicios (arto 47 de la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres). Dichos procedimientos se regirán, bajo el amparo del Código Procesal Penal.

Estos son los procedimientos legales que el Código Penal y Procesal de Nicaragua establecen en su partes normativas para someter al agresor o victimarios a purgar penas de privación cuando se encuentran culpables ante el delito de Violencia intrafamiliar y que en la mayoría de los casos no se castigan y sancionan por una falta de procedimientos y coordinación de las instituciones que imparte o imparte justicia.

Conclusiones

1. Concluimos que existe un avance en nuestra legislación con la incorporación de nuevas figuras delictivas, que responde a la necesidad de que el Estado a través del poder punitivo, regule las conductas que atentan contra el bienestar y el desarrollo de la sociedad y que además se deben de erradicar los estereotipos y conductas patriarcales de discriminaciones y desigualdades, desde el hogar, escuelas, comunidad, trabajo etc. Específicamente, aquellos delitos cuya connotación infiera en la mujer como víctima, pero pese a dicho avance, se requiere de normativas, que por complejidad del delito, violencia doméstica o intrafamiliar, el legislador complete su tareas a fin de evitar la impunidad en que se pudiese incurrir ante vacíos legales.
2. Es necesario, reconocer y tipificar el Femicidio y adecuarlo al Código Penal porque su inclusión, permitiría establecer una calificación más explícita del delito y, por ende, hacer un sistema de Registro Policial y del resto del sistema de Justicia que visualice la situación de violencia de género, que permita establecer sanciones penales específicas que develarían una situación hasta ahora mal tipificada con los delitos de parricidio, asesinato y homicidio.
3. Nicaragua debe de honrar los compromisos internacionales basados en los instrumentos internacionales como la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW) y la convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer convención(Belem Dó Pará), para eliminar obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio pleno de sus Derechos, e igualmente hacer más efectivos y justos los procedimientos para su aplicación, porque no basta tipificar el femicidio como lo establece la Ley integral de violencia hacia las

mujeres y ser suscriptores de instrumentos y convenciones internacionales, sino hay cambios de actitudes y voluntad política para resolverlos en conjunto con los operadores de Justicia.

4. La penalización y creación de nuevos delito en la región Centroamérica, como Costa Rica, Guatemala, el Salvador y ahora Nicaragua, es un logro para la mujer. En el caso de Nicaragua el tipo Penal del femicidio como se establece en la ley integral de Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley No. 641, del Código Penal, es un logro para las mujeres Nicaragüense que demandaron una Ley que castigue a los agresores porque no se puede hablar de una Ley contra los hombres sino en un sentido más amplio, es decir castigo y cárcel a quien comete el delito.

5. Se debe de tipificar el femicidio y reconocerlo en nuestro Código Penal vigente a través de una reforma, ya que permitiría establecer un tipo penal adecuado a las exigencias del estado Moderno y a las demandas de castigo, sanción punitiva a los agresores que cometen este delito haciendo del mismo una calificación penal más explícita para su aplicación y, por ende abonaría a la disminución de los casos de muerte de mujeres de manera violenta de parte de los esposos, compañeros, ex compañeros y otros. Además este tipo Penal contribuiría a situaciones penales y sanciones específicas que develarían una situación hasta ahora confundida por la mala práctica Judicial con los delitos de parricidio, asesinatos y homicidios.

Recomendaciones

1. Trazar un sistema que garantice el acceso a medios inmediatos de daños y reparación, protección, apoyo y asistencia jurídica integral a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, así como, un efectivo acceso a la justicia de las mujeres es decir visibilizar a la mujer no re victimizarla como sucede en la actualidad, y comprometer al Estado de Nicaragua a cumplir con los instrumentos Internacionales con enfoque de género el cual es suscriptor.

Además capacitar y sensibilizar a los operadores de Justicia en tema de violencia y fortalecer a las comisarías de la mujer.

2. Garantizar el acceso de la justicia a las comunidades de las zonas rurales más alejadas y más aun a los facilitadores de justicia donde no existan comisarías de la mujer y de más juzgados de distritos, locales y únicos.
3. Fortalecer la institucionalidad de la coordinación interinstitucional a todos los niveles y por ende, establecer las políticas rectoras de coordinaciones interinstitucionales, asimismo retomar la apropiación de la promoción de un modelo de atención integral articulado en la ruta crítica, que todos esos actores se involucren en un sistema y procedimiento interno.
4. Llevar un registro único para diferenciar los casos de violencia y los casos de Femicidios.
5. Unificar y fortalecer la información y el análisis y capacidades, en criterios de riesgos de Femicidio, por ejemplo considerar la reincidencia como un elemento de riesgo y desvincular a las mujeres que estén en situación de riesgos del inicio del proceso.
6. Incorporar entre las medidas de reinserción y protección la visita obligada del imputado al órgano Judicial y sanciones que sean socialmente

ejemplares y hacerlas públicas a fin de garantizar que el imputado acepte su responsabilidad.

7. Exigir a través de las Organizaciones de Mujeres un mayor presupuesto para la implementación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres que obliguen al Estado de Nicaragua asumir con responsabilidad el problema de la violencia y Femicidio de las mujeres.
8. Es encomiable, la tipificación que algunos países de la región que incluyeron en sus respectivos Códigos Penales creando nuevas conductas delictivas y por ende, la tipificación del Femicidio en su ordenamiento y de todas las formas de violencia hacia la mujer, sin embargo estos países de la Región deberían de unificar criterios únicos en el tema de la violencia y Femicidio, ósea llevar sub Registros, Registro único a nivel de Centroamérica que permita analizar la situación del problema del Femicidio y violencia intrafamiliar y, por ende, llevar a cabo políticas graduales para su erradicación y disminución.
9. Recomendamos que el Estado, Ministerio Publico, Policía Nacional, Poder Judicial y otras instituciones, deben elaborar un procedimiento especial o acuerdo Ministerial para dar tratamiento a los delitos contemplados en la Ley integral contra la Violencia hacia las mujeres para que se cumpla con la misma.
10. Asignar mayor presupuesto a la Policía Nacional, para contrarrestar el problema de violencias y todas sus formas que permita elaborar planes de seguridad y capacitar a las comisarías de las mujeres para la aplicación de la Ley.

Listas de referencias

- Álvarez, M., & Almachiara D' A,(2010). *Femicidio en Nicaragua. Abordaje y propuestas de indicadores para la acción/PATH*.1ª ed. Managua. Intercambios.
- Constitución Política de Nicaragua. 4. Ed. Managua. Nicaragua. Hagamos Democracia.
- Código Penal de Nicaragua Ley No.641: *Código Penal Nicaragüense* ("La Gaceta, No. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo", 2008).
- Código Procesal de Nicaragua "Ley No.406: *Código Procesal Penal Nicaragüense* ("La Gaceta, No. 243 y 244 del 23 de diciembre 2001",).
- Derechos Humanos en Nicaragua. (2007-2009). *Observaciones y recomendaciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas 2007-2009. Observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW*. ONU. Managua.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2009) *femicidios, más allá de la violación del Derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los casos de femicidios de Ciudad Juárez, san José, CR*.IIDH.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008). *Guía de capacitaciones de Derechos Humanos de las Mujeres*. Managua. Agencia Española de Cooperación.
- Justicia. Revista del Poder Judicial de la República de Nicaragua (2010) *foros judiciales. Código Penal Nicaragüense y su impacto en la Mujer*. No 41. Managua. Centro de documentación e información Judicial.
- Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Nicaragua.

Ley de Igualdad de derechos y Oportunidades "Ley 648", Gaceta Diario Oficial No.51, 14 de febrero del año 2008.Nicaragua.

Ley contra la Violencia Doméstica (decreto No. 250-2005) que entro en vigencia el 11 de marzo del 2006) y se adiciona las reformas al código penal de honduras. Honduras.

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres quien entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2012. El salvador.

"Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer" (Decreto 22-2008).Guatemala.

"Ley No. 8589 de Penalización de Violencia Contra las Mujeres. (Gaceta 103, 2008).Costa Rica.

La Boletina. (2010). Revista Femenina. Managua. Autor.

Movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas "María Elena Cuadra" (2011). Misoginia y todas las formas de Violencia contra las mujeres.

Naciones Unidas (2010). *Memoria del primer encuentro de Mesoamérica y el Caribe sobre Violencia hacia la Mujer*. Realizado en la ciudad de San salvador, salvador los días 15 y 16 de marzo (paper)

Nicaragua. Policía Nacional. Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez.(2008)PNUD. *Diagnóstico de la violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua / Policía nacional Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez*.1a ed. Managua.

Russell, D & Jill, R. *femicidio, la política de asesinatos de las mujeres*. (2006) 1 ed. Recuperado el día 15 de octubre del año 2011 de <http://es.scribd.com/doc/68410607/1/Los-conceptos-de-femicidio-Feminicidio>.

Red de Mujeres contra la violencia (2011). *Informe Nonestral de femicidio en Nicaragua*. Managua. Autor.

Red de Mujeres contra la violencia (2011). *Estadísticas e informes sobre las víctimas de femicidio*. Managua. Autor.

Reglamento de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Decreto (29-2009) (gaceta diario oficial No. 121," 2010.

Libros y documentos electrónicos

Anónimo. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del feminismo? Recuperado el día 14 de noviembre del año dos mil 2012.

<http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061129103201AAorzcc>

Carcedo, A.,& Sagot, M.(2000). *Femicidio en Costa del Rica 1990-1999.(OPS)* Recuperado el 23 de 0cubre año 2011. De

http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3AANA+CARCEDO+Y+MONTSERRAT+SAGOT%3A+FEMICIDIO+EN+COSTA+RICA&catid=2%3Afeminicidio&Itemid=3.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM. (2011) .*Contribuciones al debate sobre la tipificación penal del Femicidio /femicidio cladem.org/index.php?...1423%3Acontribuciones-al-debate... recuperado el 20 de Noviembre del 2011.*

Corsi, J (sf). La Violencia Hacia las Mujeres como Problema social. Análisis de las consecuencias y de los factores de riesgos. Recuperado el 3 de octubre del año 2010 www.m-grup.com/revistas/pdf/.../6-conversacion-con-jorge-corsi.pdf

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH (2006). Situación y Análisis del Femicidio en la Región Centroamérica. De http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_157895943/I%20Informe%20Regional%20Femicidio.pdf, recuperado el 10 de agosto del año 2011.

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres evidencia un ataque sistemático contra la mujer bajo el régimen golpista (2009) en recuperado el 12 de enero del año 2012 Honduras, (2009).

<http://www.cipamericas.org/es/archives/1917>

Lagarde, M. F. Impunidad y femicidio en México. (2007), recuperado el 15 de diciembredel2011.[Http://feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3AMARCELA+LAGARDE...](http://feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3AMARCELA+LAGARDE...)

Peixoto J, M &Rodríguez, Y. (2010). Violencia de Género, un Problema de conflicto social. Situación en España. Recuperado el día 12 de febrero del año dos.

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflicto-social/revista/.../09_peixoto-castro.p...

Documento en soporte electrónico.

Resultado Final del Examen periódico Universal Derechos de Naciones Unidas. [Cd]. (2010). Versión Microsoft Word. Nicaragua.

Recursos Audiovisuales. Programa televisivo.

Aristegui, C. (Productor). (2010). Femicidios, Justicia para las mujeres en la Región Mesoamericana.[Aristegui, CNN en Español]. Estados Unidos.